



**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

1 8 0 3

**LAS CARAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL PÁRAMO: UN ESTUDIO DE
CASO SOBRE LAS VISIONES DE LA PAZ, LA JUSTICIA Y LA REPARACIÓN
EN EL MUNICIPIO DE SONSÓN**

POR:

MELISSA VALENCIA HERNÁNDEZ

**TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE POLITÓLOGO
MODALIDAD INVESTIGACIÓN**

ASESORA:

IRENE PIEDRAHITA ARCILA

**PROGRAMA DE CIENCIA POLÍTICA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA**

MEDELLÍN

2021

Tabla de contenido

<i>Introducción</i>	4
<i>Diseño metodológico</i>	11
<i>Desarrollo económico y disputas territoriales en el Oriente Antioqueño: imposición de un modelo económico, protesta social y conflicto armado</i>	19
<i>Las dos caras del conflicto armado en Sonsón: acciones armadas y repertorios de acción colectiva</i>	23
<i>Actores armados en el municipio de Sonsón: ambigüedades, diferencias y relacionamiento con la población.</i>	31
FARC- EP y ELN en el municipio de Sonsón.....	34
FARC- EP en el municipio de Sonsón: ¿Más que un ejército de ocupación?	37
Paramilitares en Sonsón: orden, despojo y modelo económico.....	38
<i>Visiones de la justicia, la paz y la reparación en el municipio de Sonsón</i>	42
Visiones de la justicia en el municipio de Sonsón: perspectivas “desde arriba” y “desde abajo”	43
Formas de justicia adoptadas a partir de una perspectiva “desde arriba”	44
Formas de justicia adoptadas a partir de una perspectiva “desde abajo”	47
<i>Visiones de la paz en el municipio de Sonsón: entre la paz neoliberal y la paz democrática</i>	51
Disputas en el territorio del Oriente Antioqueños tras el proceso de pacificación armada... ..	51
La paz en jaque: entre los proyectos de desarrollo y la resistencia de las comunidades	52
Proyectos hidroeléctricos	52
Proyectos mineros	54
<i>Reparación en el municipio de Sonsón: ¿una reparación transformadora?</i>	57
<i>Conclusiones</i>	61
<i>Anexos</i>	65
<i>Bibliografía</i>	65

Las caras del conflicto armado en el Páramo: un estudio de caso sobre las visiones de la paz, la justicia y la reparación en el municipio de Sonsón¹.

Melissa Valencia Hernández²

Resumen: El presente artículo reflexiona sobre la visión de la justicia, la paz y la reparación de los pobladores del municipio de Sonsón, Antioquia. Indaga sobre cómo estas percepciones facilitan o dificultan la construcción de paz en el territorio. Espera mostrarse que las resistencias, los sistemas de fuerzas y las disputas que se entretajan en Sonsón respecto a construcción de paz y la reconciliación son importantes para determinar las dificultades, las posibilidades y los retos que pueden existir en torno a las políticas y proyectos que se delinean desde el gobierno para la paz en el país. Todo esto podría contribuir a elaborar nuevas formas de entender estos procesos políticos que se entretajan en zonas donde el conflicto armado dejó grandes huellas, y dar luces sobre las necesidades, vacíos y críticas que existen frente a los lineamientos de la construcción de paz que se gestan en el país.

Palabras clave: construcción de paz, conflicto armado, Sonsón, Oriente Antioqueño, justicia, memoria, reparación.

¹ Esta investigación recibió apoyo del Fondo de Trabajos de Grado para estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Agradezco a la Facultad por el apoyo brindado a este proyecto, el cual permitió la posibilidad de realizar el trabajo de campo para la investigación.

²Estudiante del pregrado de ciencia política de la Universidad de Antioquia. E-mail: melissa.valencia1@udea.edu.co

Introducción

*No sigas deambulando con la herida
sin poder escapar a lo ocurrido
más bien piensa que de tanto y tanto daño
sanarán hasta el fondo aquellas almas
las heridas que dejaron con sus armas.
Gloria Mejía Marín, Sonsón, 2008.*

En 1600 William Shakespeare escribió que "el destino es el que baraja las cartas, pero nosotros somos los que jugamos" (1600, sp), frase que evoca mi proceso para realizar esta investigación. Ciertamente cuando llegué al municipio de Sonsón por primera vez en el 2018, no sabía cómo jugar mis cartas: era una estudiante de sexto semestre de Ciencia Política que nunca había hecho trabajo de campo y mucho menos tenía experiencia en abordar temas del conflicto armado con las víctimas que vivieron en carne propia aquellos flagelos y vejaciones de la guerra. Conocía algunos de ellos porque se reflejaban en informes y en historias que más de una vez los docentes de mis cursos de la Universidad de Antioquia nos relataban. Conocía en el papel las victimizaciones, los periodos de escalamiento del conflicto armado, la legislación sobre la reparación, los actores, algunas acciones de resistencia por parte de la población, pero esta vez estaría frente a las cicatrices abiertas de la guerra, las voces silenciadas, el miedo, la desconfianza, las disputas, la resistencia, el olvido y la memoria.

No estaba segura de si las cartas con las que contaba serían suficientes para asumir este reto. Tenía entre mi baraja las técnicas y aprendizajes del curso de diseños cualitativos que había visto en la Universidad: las pautas para diseñar una entrevista estructurada o semi estructurada, las formas en las que se pueden generar acercamientos con la comunidad y algunos consejos sobre cómo manejar situaciones en las que se pueden desbordar los sentimientos y susceptibilidades de la gente al adentrarse en temas tan espinosos como el conflicto armado. Sin embargo, este no era el salón de clase en el que podía darme la licencia de interpelar al otro sin miedo a herir susceptibilidades o en el que tendría la ayuda del

docente para resolver algún imprevisto en medio de una entrevista. Por lo que el trayecto Medellín- Sonsón, estuvo lleno de tribulaciones, dudas y cuestionamientos de esta índole.

El viaje duró unas tres horas y el paisaje era en su mayoría montañoso. Para llegar a Sonsón desde Medellín, se atraviesan otros municipios del Oriente Antioqueño como lo son La Ceja y La Unión. Sonsón es el más grande de los municipios de esta subregión, al contar con una extensión de 1323 km². Gran parte de su territorio está ubicada en la zona páramo, pero también cuenta con tierras bajas en el Magdalena Medio, que limitan con los departamentos de Boyacá, Caldas y el municipio antioqueño de Puerto Triunfo³. Se le considera como un núcleo de campesinado intermedio y ha sido de gran relevancia para la colonización antioqueña hacia el departamento de Caldas y el norte del Valle del Cauca. Su casco urbano solo comprende el 1% de la totalidad del territorio, por lo que la zona rural es vasta y alberga a la mayor parte de la población.

Este era el territorio al que me enfrentaba, un municipio con zonas muy diversas y fragmentadas por las cordilleras, donde existían corregimientos en la zona rural tan distantes del casco urbano, que para llegar hasta allí era necesario transportarse en chivero o en caballo; y ni hablar de aquellos que se ubican a la vera del Magdalena Medio, donde el viaje podía tomar unas siete horas desde la zona urbana. Fueron precisamente estas condiciones territoriales tan diversas y este distanciamiento entre los diferentes corregimientos y el casco urbano, los que permitieron que los grupos armados se ubicaran en las zonas más apartadas para protegerse y que, a su vez, se hicieran con el dominio de estos lugares para reconfigurar la vida social, política y económica según sus necesidades.

Al llegar al casco urbano y bajarme en el parque principal, pude percibir algunos de los elementos de esta configuración territorial: su cabecera está delimitada por una gran zona montañoso y por los accidentes orográficos de la cordillera central de los Andes colombianos. Se puede visualizar de manera casi caricaturesca algunos cultivos a lo lejos, la humedad se hace más evidente y la temperatura tiende a decrecer al encontrarnos próximos al páramo. Además, en el parque principal se encuentran vestigios del proceso de colonización

³ En la página web del municipio de Sonsón pueden verse estas características, así como otras ligadas a procesos económicos, sociales y culturales. Ver página web de la Alcaldía de Sonsón, disponible en: <https://www.sonson-antioquia.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Informacion-del-Municipio.aspx>

antioqueña al toparnos con balcones con estilo republicano de finales del XVIII. En suma, varias de las características que había investigado sobre este municipio se hacían visibles al poner un pie en su zona urbana.

Luego de recorrer algunas calles principales del municipio, me puse en labor. La primera misión del día era reunirme con un líder social que era conocido por contar con una larga trayectoria trabajando con campesinos víctimas del conflicto armado en los corregimientos de Río Verde de los Montes y Río Verde de los Henaos; los cuales se encuentran ubicados en la zona rural del municipio, a varias horas del casco urbano. Para llegar allí, es necesario realizar una importante travesía en carro y caminando. Debido a su lejanía del casco urbano, su geografía boscosa y una ubicación privilegiada que les permite la comunicación con Argelia, San Francisco, Cocorná en Antioquia y con algunos municipios del departamento de Caldas; estos territorios se convirtieron en una zona de influencia de actores armados como el ELN y las FARC-EP. Con el escalamiento del conflicto y las disputas de los diferentes actores armados que tuvieron presencia en Sonsón posterior al año 1997, gran parte de los habitantes de estos territorios experimentaron el flagelo del desplazamiento forzado (Conciudadanía, 2019). Posteriormente, cuando los eventos de la guerra descienden hacia el año 2008, la situación de orden público comienza a normalizarse en el municipio, dando paso a que algunos de los habitantes de las zonas rurales comiencen a regresar a sus territorios por cuenta propia, sin un debido acompañamiento gubernamental que garantice un verdadero proceso de retorno. Por otro lado, en el país se pone en marcha la Ley 1448 de 2011⁴, la cual surge ante la necesidad de crear mecanismos que dieran lugar a la participación y a la materialización de los derechos de las víctimas; por lo que se reestructura y modifica el aparataje institucional dirigido a la atención, asistencia y reparación integral de las víctimas del conflicto armado, reconociendo los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición. Por lo que, en el municipio, se pondrán en marcha planes, programas y proyectos que pretendían reparar el daño sufrido ante la guerra bajo el amparo de esta normatividad.

⁴ También denominada Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, fue producto de fuertes debates públicos y suscitó una gran resistencia por parte de sectores políticos que se negaban a reconocer la existencia en Colombia de un conflicto armado, esto con el objetivo de enmarcar la violencia colombiana exclusivamente dentro del contexto de acciones terroristas (Jiménez y González, 2012).

Teniendo presente este panorama sobre las dinámicas del conflicto armado en esta zona rural del municipio de Sonsón, estaba muy interesada en conocer la visión de este líder social sobre el conflicto armado, los procesos de reparación, justicia, verdad en estos lugares, su perspectiva sobre las dificultades que atraviesa el sector rural actualmente en el municipio. Sin embargo, el encuentro tomó un rumbo muy distinto al esperado, pues esta persona no accedió a conversar conmigo sobre aquellos temas. En lugar de ello, asumió una postura muy crítica frente al papel de la academia en los lugares donde los embates del conflicto armado fueron bastante álgidos.

De acuerdo con la perspectiva de este líder, académicos y estudiantes de diferentes partes del país han llegado a los municipios del Oriente Antioqueño porque quieren estudiar las dinámicas de violencia y resistencia en el marco del conflicto armado. Sin embargo, muchos de ellos se han acercado a estos lugares sin adquirir ningún tipo de compromiso social con este territorio y con sus habitantes, pues su verdadero interés ha sido relacionarse con los pobladores para conocer sus historias, memorias y relatos y utilizarlos como bases de datos o fuentes de información para llenar anaqueles con sus informes, artículos científicos y trabajos de grado. Pero las críticas no terminaron allí. También se lanzó en ristre contra mi trabajo investigativo. De forma contundente me expresó que ya no era necesario preguntarse por asuntos del conflicto armado, porque este episodio fatídico formaba parte del pasado.

Traigo a colación esta anécdota, porque tras mi primera entrevista con este líder social del municipio de Sonsón, empezaron a surgir interrogantes no solo acerca de la investigación social, sino sobre la relevancia y la vigencia del trabajo que quería realizar en aquel territorio. Respecto a mi rol como investigadora, decidí que no quería relacionarme con estas personas y con dicho lugar bajo el rótulo de una representante de la Universidad de Antioquia y del medio académico, cuyo fin fuera extraer información para presentar un artículo final y poder obtener mi título como politóloga. Quería entender las disputas y discursos a partir de la formulación de un problema de investigación que me posicionara desde otras posturas. Además, pretendía inclinarme por una investigación social con una cara más humana, “enteramente sensible de las condiciones históricas de exclusión, violencia o marginalidad que han padecido algunas comunidades o algunos agentes históricos y sociales” (Packer, 2013, pág. 446). Por otro lado, respecto a la relevancia de la investigación que estaba

adelantando, me retumbaba en la cabeza la pregunta que me hizo el líder social en aquella entrevista: ¿Por qué hablar del conflicto armado en Sonsón en la actualidad? Para él, la respuesta era muy clara: no era necesario retrotraer esos eventos desgarradores. Pero para mí, la solución a esta incógnita no era tan sencilla, porque esta era el *quid* de mi problema de investigación.

Para mí resultaba de gran relevancia problematizar el conflicto armado en Sonsón de cara a la refrendación de los acuerdos de paz entre las FARC-EP y el gobierno nacional en octubre de 2016, ya que la disminución de la violencia en este municipio no se tramitó por un proceso de paz entre los actores armados, sino que se dio una suerte de “pacificación armada”, en la cual primó una solución militar a la confrontación. Lo cual significó la posible existencia de visiones contrapuestas frente a las dinámicas, hechos y huellas que dejó la guerra en este territorio. Además, de versiones, testimonios e historias que podrían seguir silenciadas, soterradas y hasta olvidadas. Incluso, se me pasó por la cabeza que existiesen víctimas cuyos procesos de reconocimiento y reparación no hubiesen tenido lugar en todos estos años. Por lo que me preguntaba ¿Cómo se tramita el posconflicto en un territorio donde no hubo un consenso entre los actores armados, ni entre la población? ¿Cuál es la versión oficial de lo sucedido durante la guerra y cuáles visiones buscan disputar este discurso? ¿Cómo estas visiones afectan o posibilitan la construcción de paz en el municipio? ¿Cómo ha sido el proceso de reparación de las víctimas en este territorio?

Por otro lado, si bien actualmente la confrontación armada en el municipio ha terminado, aún existen hechos de violencia generados por quienes están a cargo del microtráfico⁵. Además, la riqueza hídrica, mineral y la biodiversidad que existe en Sonsón, ha generado nuevas disputas por el territorio en clave del progreso y del desarrollo de la región; lo cual podría poner en vilo la construcción de paz en este municipio⁶. Por lo anterior, resulta importante problematizar aquellas dinámicas territoriales que podrían poner en jaque el bienestar, la

⁵ En la actualidad, en el municipio hay presencia de pequeños grupos por el control del microtráfico que han realizado hechos de violencia. Por ejemplo, este año fueron asesinadas dos personas bajo la modalidad del sicariato. Ver: <https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/dos-hermanos-victimas-de-doble-homicidio-en-ataque-de-sicarios-en-sonson>

⁶ En el municipio aún existen disputas por el modelo de desarrollo económico y de acuerdo con el testimonio de las personas entrevistadas durante el trabajo de campo, se presentan tensiones entre ciertos órganos institucionales, empresas privadas y habitantes de los territorios donde se quieren llevar a cabo estos proyectos. Además, en los últimos años se han registrado amenazas y algunos asesinatos de líderes sociales en la región.

supervivencia y la seguridad de campesinos, líderes sociales, defensores de derechos humanos. Así que empecé a preguntarme por: ¿Cuáles son los megaproyectos de carácter minero-energético que han generado disputas por el territorio en los últimos años? ¿Existen proyectos agroindustriales en el municipio que puedan perjudicar al campesinado sonsoneño? ¿Han existido amenazas hacia campesinos, defensores de derechos humanos, víctimas, campesinos, líderes sociales y políticos por oponerse a estos proyectos? ¿Qué relación hay entre estas formas de relacionarse con el territorio y las nociones sobre justicia, paz y reparación que tienen los habitantes del municipio de Sonsón?

A partir de los interrogantes planteados anteriormente y de la problematización del conflicto armado y la construcción de paz en el municipio de Sonsón, es que comienzan a delinearse los objetivos del proyecto investigativo que dan pie a la elaboración de este artículo. Dicho proyecto se inscribe en el marco de la convocatoria para proyectos de investigación presentados por estudiantes de pregrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia 2018, y tiene como objetivo identificar las visiones de la justicia, la paz y la reparación de la población del municipio de Sonsón, y cómo estas percepciones facilitan o dificultan la construcción de paz en el territorio. Partiendo de este objetivo general, en el presente artículo se pretenden describir las visiones de sectores políticos, sociales y económicos en Sonsón respecto a la justicia, la paz, la reparación y cómo estas posturas dan paso a diferentes estrategias de construcción de paz. Atendiendo al hecho de que si bien existen políticas estatales que pretenden dar unos lineamientos sobre la construcción de paz en el país, también se encuentran:

“estrategias de poder que se ponen en funcionamiento más allá –o más acá– de las políticas estatales [...] pequeños espacios reticulados que se tejen en los intersticios de las grandes estrategias políticas –espacio macro político–, en conjunción o disyunción con ellas [...] espacios que diseminan otras estrategias y otros sistemas de fuerzas y que diseñan disputas” (García, 2000, pág. 12).

Por otro lado, según la postura de este trabajo, para entender las dificultades y retos de la construcción de paz en el municipio es necesario remitirse a las dinámicas del conflicto armado, las acciones de resistencia de la población, las relaciones de los diferentes actores armados con la población, los propósitos de los mismos en el municipio y las

transformaciones que el conflicto armado generó en el territorio; ya que estos factores han sido elementos esenciales para construir una versión oficial de lo sucedido durante el conflicto armado tanto en el Oriente Antioqueño como en el municipio, y con base en esta erigir discursos y políticas que apunten a una visión de construcción de paz.

De acuerdo con la posición del presente escrito, la memoria oficial⁷ del conflicto armado no solo ha soterrado memorias subterráneas⁸, cuyos testimonios y posturas son esenciales para nutrir las concepciones de justicia, paz y reparación en el municipio, sino que ha replicado una versión de los hechos que califica a ciertos actores armados de "héroes" y a otros de "villanos", promoviendo un claroscuro respecto a la historia del conflicto armado en Colombia y dando pie al ocultamiento de actores, hechos y dinámicas que deben ser escuchados para evitar la impunidad y la revictimización. Por lo tanto, el recurso de la memoria fue de gran relevancia para este escrito en tanto posibilitó no solo conocer los contextos, las prácticas y posturas de diferentes actores respecto a lo acontecido durante la guerra, sino que también se configura como un importante escenario de disputa “donde se enfrentan múltiples actores sociales y políticos que van estructurando relatos del pasado y, en el proceso de hacerlo, expresan también su proyectos y expectativas políticas hacia el futuro” (Jelin, 2001, pág. 43).

De otro lado, este trabajo comparte la posición de Insuasty (2017), según la cual, el Oriente Antioqueño es una región cuya población se ha visto y sentido como externa a su territorio, en la que otros definen y disponen de su presente y futuro; donde unos lo han hecho por vía armada, otros a través de unas leyes que se acomodan a los intereses de empresas nacionales y transnacionales, pero todos avanzan tras el control de estos territorios para la implementación de megaproyectos energéticos, mineros y agroindustriales. Por lo que, estas visiones contrapuestas sobre modelos de desarrollo y los conflictos actuales por el territorio,

⁷ La memoria oficial se refiere a todo discurso o narrativa hegemónica proveniente del Estado y que tiene la finalidad de persuadir o invisibilizar otras visiones sobre lo ocurrido en contextos de violencia. (Zuluaga, M. 2015. p. 91). Es decir, desde el Estado se marginan otros sentidos de la realidad. Jelin describe la memoria oficial como “una lucha política activa acerca del sentido de lo ocurrido, pero también acerca del sentido de la memoria”. (Jelin, E. 2002, p.).

⁸En contraposición a esta “memoria oficial” encontramos las denominadas memorias subterráneas, término desarrollado por Pollak (2006) para referirse a aquellas memorias integradas por aquellos grupos de las culturas minoritarias y dominadas. Por otro lado, esas memorias subterráneas prosiguen su trabajo de subversión en el silencio y de manera casi imperceptible afloran en momentos de crisis a través de sobresaltos bruscos y exacerbados (Pollak, 2006, pág. 2).

serán esenciales para entender los nuevos retos a los que se enfrenta la construcción de paz en este municipio.

Para dar sentido al *puzzle* de la guerra y la paz en el municipio de Sonsón, se contará con la siguiente estructura en el escrito: en un primer momento se da a conocer la propuesta metodológica utilizada para llevar a cabo este trabajo. Posteriormente, se realiza un contexto sobre las disputas territoriales que han imperado en el Oriente antioqueño, para así llegar a comprender algunas de las dinámicas de la guerra en Sonsón y los procesos de supervivencia y resistencia de la población. A continuación, en el tercer apartado, se problematizan las visiones contrapuestas de la paz, la justicia y la reparación en el municipio. En esta sección, se conjugarán tanto los referentes teóricos como los hallazgos del trabajo de campo. Por último, se dará paso a las conclusiones y apreciaciones finales del artículo.

*La necesidad de contar puede caer en el silencio,
en la imposibilidad de hacerlo, por la inexistencia
de oídos abiertos dispuestos a escuchar*

Elizabeth Jelin, 2002

Diseño metodológico

A medida que fui construyendo la estrategia metodológica para la presente investigación, decidí optar por el método de estudio de caso para comprender las particularidades del conflicto armado, la paz, la justicia y la reparación en el municipio de Sonsón. Además, atendiendo a que la mayor fortaleza de este método radica en que “permite medir y registrar la conducta de las personas o actores involucradas en el fenómeno estudiado” (Yin, 1989, pág. 23), considero que posibilita explorar las diferentes visiones de los actores a partir de escenarios locales, prácticas cotidianas y discursos en los que la política y lo político

desbordan los espacios institucionales. Por otro lado, siguiendo a Yin (1989), el estudio de caso tiene grandes potencialidades a la hora de ser utilizado en la investigación empírica. Entre dichas bondades, resalta que permite indagar sobre un fenómeno contemporáneo en su entorno real, profundizar en el contexto, estudiar los problemas de investigación desde múltiples perspectivas y no desde la influencia de una sola variable. En este método los datos pueden ser obtenidos desde una variedad de fuentes, tanto cualitativas como cuantitativas; como lo son: los documentos, registros de archivos, entrevistas directas, observación directa, observación participante e instalaciones u objetos físicos (Chetty, 1996, pág. 77).

Para el caso de la presente investigación, las posibilidades que ofrece este método a la hora de realizar investigación empírica fueron de gran ayuda para comprender un fenómeno del que no existía una vasta bibliografía. Se encontró información acerca del conflicto armado en el Oriente Antioqueño y en Sonsón, además de algunos documentos relacionados con las acciones de resistencia y memoria por parte de las víctimas en el municipio⁹. Sin embargo, las fuentes secundarias sobre acciones de reparación, justicia y construcción de paz en este territorio eran de carácter escaso. En consecuencia, el trabajo de campo en esta investigación fue muy importante para profundizar en dichas nociones.

A lo largo del trabajo de campo se retomaron diversas técnicas de investigación como la entrevista, la observación, la observación participante, la revisión de archivos y el diario de campo, que permitieron hilar no solo las disputas entre las diferentes visiones de la paz, la justicia y la reparación, sino que además arrojó pistas sobre cómo se configuran las problemáticas por las que atraviesa la construcción de paz en el municipio. Además, la posibilidad de estar en el municipio, conversar con diferentes personas¹⁰ y participar de

⁹Uno de los trabajos que aporta elementos esenciales para entender las dinámicas del conflicto armado en el Oriente Antioqueño, es el texto *geografías de la guerra, el poder y la resistencia: Oriente y Urabá antioqueños 1990-2008*; el cual es producto de una investigación realizada por el Observatorio colombiano para el desarrollo integral (ODECOFI) y el Instituto de Estudios Regionales (INER) de la Universidad de Antioquia. En dicha obra, se hace énfasis en la configuración espacial del Oriente Antioqueño antes, durante y después de la guerra; así como en los procesos sociales y políticos que se desencadenaron en estos territorios en los contextos de violencia. Por otro lado, las crónicas que se revisaron sobre Sonsón arrojaron información sobre la fundación de algunos corregimientos y sus dinámicas territoriales, la llegada y el paso de los diferentes grupos armados por estos territorios y la situación de estas comunidades luego del proceso de pacificación.

¹⁰ Para los propósitos de esta investigación, la contrastación de voces fue determinante. Se entrevistaron 30 personas. Se tuvo contacto con víctimas tanto de la zona rural como urbana. También, se conversó con funcionarios públicos (personero, secretario de asistencia rural y medio ambiente, enlace de víctimas, funcionario de la casa de la cultura), líderes sociales y comunitarios, integrantes de la mesa de participación, miembros de la mesa de víctimas, líderes políticos, funcionarios de administraciones anteriores, académicos,

diferentes actividades me permitió ir adentrándome en los siguientes interrogantes: ¿Cómo se fueron construyendo las diferentes visiones sobre estos conceptos? ¿Por qué priman ciertos discursos respecto a la construcción de paz en el municipio? ¿Por qué prevalece una versión oficial del conflicto armado en Sonsón? Sin embargo, llevar a cabo esta investigación en un contexto institucional donde existía cierta reticencia a que accediera a los archivos municipales, donde había quienes consideraban que el conflicto debería ser olvidado y donde la desconfianza hacia una persona del mundo académico era latente; suponía un reto importante¹¹.

Al principio, generar lazos de confianza con las personas fue difícil. En primer lugar, porque era alguien ajeno a este territorio y solamente conocía a las dos personas que me hospedaban cuando realizaba las labores de campo. Por otro lado, existía cierta reticencia por parte de algunos miembros de la comunidad para tratar un tema tan intrincado como el conflicto armado, y es que no era para menos, a muchos la guerra los había trastocado de una manera irremediable. Pero, no solo era eso, a muchos les resultaba complejo hablar de todo lo que sucedió luego de los hechos fatídicos: el proceso de duelo, sanación, vivir en otros lugares diferentes al municipio y las dificultades para el retorno o regreso a sus territorios. Por lo tanto, los primeros acercamientos fueron complejos, se realizaron en lugares públicos y se enfocaron en saber quién era yo, cuáles eran los propósitos de la investigación y quién me había dado el nombre y número telefónico del entrevistado. Cuando quien referenciaba a estas personas era un familiar, miembro de un mismo movimiento social o político, amigo cercano o alguien en quien se confía por compartir la fatalidad de la guerra, eran más abiertos a conversar y existía una mayor disposición a ser entrevistados. En cambio, cuando lo hacía un conocido, académico o una persona que no era muy cercana, rechazaban inicialmente la entrevista o sugerían que me acercara a la Personería o a la Unidad de Víctimas para que me proporcionaran información respecto a esos temas.

A medida que frecuentaba el municipio y la red de contactos se ampliaba; el miedo, la desconfianza y la incertidumbre de las personas que conversaban conmigo fue

campesinos, miembros de movimientos sociales, funcionarios de algunas multinacionales de monocultivo de aguacate.

¹¹ La actual alcaldía del municipio es contraria a los acuerdos de paz firmados entre el gobierno y las FARC-EP, lo que dificultó el acceso a algunas fuentes de información.

desapareciendo y no solo las entrevistas fueron transformándose, sino también nuestra forma de relacionarnos. Los encuentros pasaron de realizarse en lugares públicos a llevarse a cabo en sus hogares. Poco a poco se fueron abriendo conmigo y terminaron por contarme sus historias de vida, sus creencias, sus posiciones actuales y sus sentimientos. Por lo que, a través de las entrevistas, se fue “generando una relación de confianza basada en lazos establecidos entre el que habla y el que escucha, sobre todo cuando el ámbito de la entrevista es el espacio privado” (Catela, 2000, pág. 70). En este espacio privado, los intercambios lingüísticos tienen consecuencias muy diferentes a los del espacio público (Polanski 1990 y Bourdieu 1996), no existe ese temor a que “lo dicho” irrumpa en el mundo de la publicidad y pueda generar estigmatización, señalamiento, acciones violentas y consecuencias negativas para el hablante. Sin embargo, hay momentos en los que estas fronteras entre lo público y lo privado son difusas y porosas, por lo que “lo dicho” en el seno del hogar puede ser difundido a través de la escritura académica. Aunque, “no todo lo que se comunica en la entrevista puede quebrar esa frontera cultural” (Catela, 2000, pág. 70), “este problema se evidencia en toda su complejidad, sobre todo, cuando los testimonios están relacionados con situaciones límite nacidas de la violencia política” (Catela, 2000, pág. 70).

Esta situación que pone de relieve Catela, la experimenté en varias entrevistas, con expresiones puntuales como: “De eso no se habla en público”, “Quiero que mi testimonio sea de carácter anónimo”, “Yo le cuento y puede utilizar lo que acabo de decir, pero no lo sostengo en público”, “Hay varia gente que sabe lo que pasó, pero por temor no hablan”. Por lo tanto, trabajar con testigos y testimonios relacionados con situaciones límites como la guerra, conllevó varios dilemas éticos para el presente trabajo. En primera instancia, se puso sobre la mesa la seguridad de las víctimas y de aquellos que dan su testimonio sobre el conflicto, pues si bien las condiciones de convivencia y de orden público han mejorado en los últimos años en el municipio, el miedo es un fantasma que sigue rondando la memoria y la vida cotidiana de estas personas. Además, ciertos líderes sociales y comunitarios con los que conversé manifestaron que tanto ellos como algunos de sus compañeros fueron estigmatizados o amenazados en tiempos recientes. Por lo tanto, fue menester tomar estrictas disposiciones para salvaguardar la identidad de estas personas, sus testimonios y la información recolectada durante el trabajo de campo.

Por otro lado, siempre está el riesgo de desbordar la sensibilidad de las víctimas y de hacerlos recordar episodios traumáticos o de gran sufrimiento asociados al conflicto armado, por lo que fue importante saber manejar situaciones en las que se compromete la emocionalidad de estas personas. Por ende, se buscaron los espacios y las condiciones para que se sintieran cómodas y en confianza para conversar. También, en medio de las entrevistas, no se indagó directamente por los hechos victimizantes, sino por sus “historias de vida”¹², ya que sus experiencias, acciones y pensamientos desbordan los sucesos que los puso en el lugar de víctimas. Además, con la presente investigación, comprendí que estas personas son sujetos políticos que fueron protagonistas de historias de lucha, resistencia y solidaridad, por lo que resultó importante profundizar en sus historias de vida, ya que esto permite “visualizar, entender e interpretar las voces que siempre han estado, pero que los discursos dominantes de nuestra sociedad nos han imposibilitado ver” (Cortés, 2011, pág. 72).

Aunque, surgieron diversos dilemas éticos alrededor de las memorias de la guerra, que supusieron un gran desafío para mí como investigadora; desmarcarme de la posición de académica en la que los habitantes del municipio me tenían, también representó un reto importante. Algunos me miraban con sospecha, porque consideraban que pretendía imponerles las visiones teóricas de la justicia, la paz y la reparación, o que solamente buscaba extraerles información para realizar este escrito. Sin embargo, a medida que se fueron tejiendo los lazos de confianza, que me involucré en sus actividades cotidianas, que me compartieron sus modos de vida, sus iniciativas para tramitar el duelo, sus proyectos y hasta sus escritos sobre el conflicto armado; la perspectiva que tenían sobre mí se transformó. Por lo que, nuestra relación también cambió y dejaron de posicionarme en un lugar distante y jerárquico.

En ese contexto, se dio la posibilidad de visitar las comunidades rurales de Río Verde de los Montes y Río Verde de los Henaos¹³, ya que el líder social que en principio se había negado

¹² “Los métodos de historias de vida o las biografías sociales contribuyen a la tarea de reconstrucción de memoria histórica y, en particular, a la dignificación de la memoria de las víctimas” (CNMH, 2013, pág. 102), ya que como plantea (Portelli, 1991), el relato de vida y su biografía social recuperan la identidad del individuo y su legacia para el futuro.

¹³ Estos son dos corregimientos de Sonsón que limitan con los municipios de Argelia y Abejorral. Son zonas distantes, pero que se concibieron como los escenarios más cruentos de la guerra en la zona Páramos, precisamente por ser zona de retaguardia de las guerrillas y porque allí se concentraron varios de los operativos militares en contra de estos grupos, lo que afectó profundamente a la población civil.

a conversar conmigo acerca de los puntos neurálgicos de este trabajo, terminó por convertirse en un puente para llegar a estos territorios. Aunque esta experiencia fue muy valiosa tanto a nivel personal como investigativo, el acercamiento inicial con estas personas fue complejo, en tanto estas poblaciones no solamente conocieron la cara más cruenta del conflicto armado. También, vivieron las vicisitudes de los procesos de reparación, donde las indemnizaciones no llegaban, los programas o políticas no se ajustaban a sus modos de vida y donde tenían que enfrentarse a un sistema burocrático que muchos no entendían. Por tanto, eran familias con altos niveles de desconfianza y no se sentían cómodas conmigo, porque pertenecía a otros contextos y a una institución de educación superior de carácter estatal.

Para romper esta barrera, entendí que lo mejor que podía hacer era involucrarme en sus actividades cotidianas. Así que me puse mis botas pantaneras y desde mi ignorancia de persona de ciudad, intenté aprender a labrar la tierra. Desprenderme de mis costumbres y formas de vida ciudadinas, me permitió conocer su relación con la tierra, sus formas de vida, su perspectiva sobre sus problemas y necesidades. Igualmente, me generó muchas más dudas que respuestas respecto a cómo nos acercamos a comunidades que tienen otras formas de entender la vida, cuya relación con la naturaleza tiene horizontes más amplios que los nuestros. Con personas que cuentan con una idiosincrasia a través de la cual construyen sus propias ideas sobre la paz y la justicia.

Por otro lado, mi paso por estos territorios me permitió entender que estas comunidades experimentan una situación de marginalidad política que es previa a los hechos de violencia acontecidos durante el conflicto armado, en tanto son sujetos que han estado desprovistos de su estatus de ciudadanía, “entendida ésta como la pertenencia efectiva a un conjunto social concreto beneficiado por las garantías que ofrecen las instituciones” (Pécaut, 1998, pág. 20). Por tanto, son poblaciones que han experimentado problemas estructurales “en términos de goce de derechos ciudadanos y de satisfacción de sus necesidades básicas” (Romero y Castaño, 2018, pág. 30). Una de las muestras más claras de exclusión política de estas comunidades, tiene que ver con que aún no cuentan con los espacios y canales necesarios para poder decidir sobre sus propios territorios. Por tanto, a raíz de esta hipótesis, surge la necesidad de explorar esas dinámicas que siguen dando paso a que sean otros actores

(armados y no armados) quienes configuren el uso y la organización del suelo en el municipio.

Estas inquietudes respecto a cómo se ha ido configurando el territorio en el municipio y sobre los actores que han formado parte de estos procesos, no fueron factores que se plantearon de manera inicial en la investigación. Estas aristas surgieron a medida que fui conversando con los pobladores y se fue estableciendo una relación entre conflicto, paz y territorio. Esta relación, me llevó a la idea de que la construcción de paz no puede ser pensada sin relación a los procesos territoriales, ya que “el propósito de hacer frente a las violencias se traduce en la meta de que el territorio, ese espacio de vida apropiado material y simbólicamente, vuelva a cumplir -o cumpla por fin- las funciones colectivas que ha perdido por el conflicto armado” (Peña, 2019, pág. 2). Del mismo modo, a lo largo de la investigación fue surgiendo otro componente que, si bien no formaba parte de los puntos nodales del trabajo, puede contribuir a explicar las versiones o enfoques respecto a la justicia, la paz y la reparación en el municipio, relacionada con los partidos políticos y las maneras como se narra la historia de lo sucedido. Esto puede verse en la siguiente nota de campo:

Luego de entrevistar a una figura política del municipio, cuya familia de tradición conservadora apoya en tiempos recientes al Centro Democrático, entendí que había pasado algo por alto. Su interpretación sobre el conflicto armado y sobre las víctimas hicieron darme cuenta de ello. Esta persona narraba el conflicto armado como si se tratara de una epopeya protagonizada por un salvador que los libró de las fauces del demonio. En cuanto a las víctimas, las asumía como unos pobres desvalidos y miserables a los que había que darles limosna por misericordia y compasión. Después, me comentó que el Partido Conservador participó en diferentes escenarios con propuestas para reparar a las víctimas. En ese momento comprendí que había dejado de lado la importancia de los partidos políticos¹⁴ y su respectiva

¹⁴ Respecto a la relación entre partidos políticos e ideología Cedillo (2009), menciona que: “los partidos políticos exteriorizan un conjunto de ideas y convicciones políticas que reflejan la forma en que conciben y ejercen el poder. En ese sistema de ideas y creencias declaran, principalmente los líderes, la forma en que gobiernan o van a gobernar, así como la manera en que representan a la ciudadanía y trabajan por el bien común. Ese conjunto de propuestas, posturas y convicciones es lo que denominamos ideología partidista” (Cedillo, 2009, pág. 576).

ideología¹⁵ en el enfoque que se la ha dado al conflicto armado, la reparación, la justicia y la paz en Sonsón (Notas de campo, 2019).

Por otro lado, la posibilidad de recorrer el territorio, contrastar voces y formar parte de diferentes actividades, me permitió concluir que, para analizar la paz, la justicia y la reparación es necesario recurrir a la memoria como enfoque para entender cómo el pasado y las interpretaciones del mismo influyen en la posturas y versiones de estas categorías. Por lo que, en este trabajo investigativo, el pasado es importante en tanto el sentido de este puede cambiar debido a las reinterpretaciones que surgen a partir de las intenciones y las expectativas de futuro. Por lo tanto, “ese sentido del pasado es un sentido activo, dado por agentes sociales que se ubican en escenarios de confrontación y lucha frente a otras interpretaciones, otros sentidos, o contra olvidos y silencios” (Jelin, 2001, pág. 39). De modo que, “los actores y militantes (usan) el pasado, colocando en la esfera pública de debate interpretaciones y sentidos del mismo, con la intención de establecer / convencer / transmitir una narrativa, que pueda llegar a ser aceptada” (Jelin, 2001, pág. 39).

Por consiguiente, para este trabajo fue crucial leer entre los recuerdos, los silencios, los saberes, las emociones, los testimonios que se involucran en estas memorias para trazar las disputas que conllevan las diferentes nociones y sentidos frente al conflicto armado, sus actores, sus dinámicas y cómo estas posturas delinean unas expectativas respecto a la justicia, la paz y la reparación¹⁶. Además, este rastreo permitió identificar cuáles memorias de manera más preponderante han pretendido “oficializar” o “institucionalizar” una (su) narrativa del conflicto armado y delinear unas aspiraciones de futuro que puedan ser compartidas y consentidas por otros. Por lo tanto, se elabora una línea del tiempo para reconstruir las lógicas de la guerra, la presencia de actores armados en el territorio, las acciones de resistencia y

¹⁵ Respecto a las ideologías Van Dijk (2005), argumenta que “las ideologías encarnan los principios generales que controlan la coherencia total de las representaciones sociales compartidas por los miembros de un grupo. Por ejemplo, una ideología racista puede controlar actitudes más específicas sobre inmigración o acción afirmativa” (Van Dijk, 2005, pág. 19).

¹⁶ Esta reflexión que suscita la memoria respecto a las prerrogativas y visiones de futuro que los diferentes actores involucrados han construido y siguen construyendo, permite repensar los marcos y enfoques usados para construir los procesos de paz, justicia y reparación. Además, en escenarios de transición política como los que atraviesa el país actualmente, las construcciones respecto al pasado permiten preguntarse por esas dinámicas del conflicto armado que pueden estar reconfigurándose en otras lógicas violentas y generar nuevas amenazas para los habitantes de estos territorios.

supervivencia de la población, el proceso de pacificación y la salida de los actores armados del territorio. Como complemento a esta línea del tiempo, se elaboró una tabla de actores armados, especificando su llegada al territorio sonsoneño, sus motivaciones y su estrategia militar; lo cual permitió entender las relaciones de estos con la población y cómo estas interacciones influyen en la construcción de paz en el municipio.

Desarrollo económico y disputas territoriales en el Oriente Antioqueño: imposición de un modelo económico, protesta social y conflicto armado.

Sentíamos que lo territorial nos convocaba. Es decir, ya era el territorio el que sentíamos y debíamos defender, sobre todo, porque la problemática era muy común, principalmente el tema del agua, y que en ese sentido teníamos que defender (MOVETE, 2018)

El Oriente antioqueño es una de las nueve subregiones en las que se divide el departamento, está integrada por 23 municipios que se han agrupado en cuatro diferentes zonas teniendo presentes las dinámicas socioeconómicas, culturales y físico-naturales de los territorios, estas son: Altiplano, Bosques, Embalses y Páramo¹⁷. A partir de los años sesenta, esta subregión experimentó importantes transformaciones al convertirse en un foco de desarrollo¹⁸ para el departamento. Como plantea Clara Inés García (2007), este territorio pasó de ser un lugar sin mucha relevancia para los sectores de poder en el país a ser “un espacio geoestratégico para la consolidación del desarrollo económico de Colombia durante las décadas de 1960-1970”¹⁹

¹⁷ El altiplano (Carmen de Viboral, El Retiro, Santuario, Guarne, La Ceja, La Unión, Marinilla, Rionegro, San Vicente); zona de bosques (Cocorná, San Francisco, San Luis); zona de embalse (Alejandría, Concepción, El Peñol, Granada, Guatapé, San Carlos, San Rafael) y zona de páramos (Abejorral, Argelia, Nariño, Sonsón).

¹⁸ Se entiende el desarrollo como un discurso que se forma en la segunda postguerra, el cual establece en el plano mundial una división tajante entre las naciones: por un lado, están los países desarrollados (como es el caso de los Estados Unidos, país que se erigió como potencia mundial luego de la Segunda Guerra Mundial) y por el otro los subdesarrolladas y tercermundistas. De acuerdo con Arturo Escobar, el presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman pretendía poner a disposición de los países menos avanzados en materia económica, el “conocimiento técnico”, para que, a través de la ciencia, la tecnología y el capital estos también pudieran alcanzar el desarrollo y abandonar su condición de atraso (Escobar, 2007, p.20).

¹⁹ Para los años sesenta, la política de *La Alianza para el Progreso* difundida por el presidente de los estados unidos Jhon Fitzgerald Kennedy, también influyó en las políticas implementadas en Colombia, estos recursos serían destinados en infraestructura, desarrollo industrial, modernización de las instituciones estatales, reforma agraria, intervención social, educación, salud. Sin embargo, el objetivo principal de esta iniciativa era hacer frente al discurso comunista en Latinoamérica, así dicha política pretendía ser un paliativo frente a las

(pág. 135). Por lo que el Oriente antioqueño se configuró en un laboratorio para implementar la planificación del desarrollo, siendo la primera región en Colombia que contó, hacia 1964, con “un plan de desarrollo regional” aunque no existía un Plan de Desarrollo Departamental de Antioquia. De acuerdo con Orlando Sáenz (1986), este fenómeno en parte respondió a los intereses de las élites industriales del Valle de Aburrá por ampliar su poder político y económico en el departamento, viendo así en esta subregión un “espacio natural de expansión de su actividad económica” (p.46).

A partir de los años sesenta se llevaron a cabo diversos procesos enmarcados en la planificación del desarrollo que reconfiguraron de manera profunda las relaciones sociales, político, económicas y ambientales en este territorio. En primer lugar, se realizó la construcción de un complejo hidroeléctrico que pretendía suplir la demanda nacional de energía a partir del represamiento de los ríos más caudalosos del Oriente antioqueño. Por lo tanto, “para 1970 y 1980 el Oriente producía alrededor del 60% de la energía eléctrica nacional, y en la actualidad sigue aportando el 36%” (García, 2007, p.135). Por otro lado, en 1985 se inaugura el aeropuerto Internacional José María Córdova, el cual permite conectar el Valle de Aburrá con el mercado internacional, convirtiéndose en un incentivo para el asentamiento de la industria y la producción económica para la exportación. Además, se construyó la autopista Medellín-Bogotá, la cual dividió la región en dos y consolidó el mercado interno del país al conectar a las dos capitales principales. Así, a partir de la implementación de estos megaproyectos se generaron dinámicas de industrialización y urbanización del Oriente cercano²⁰, pues la expansión urbanística e industrial en la capital del departamento (Medellín) provocó que se llevaran a cabo “procesos de migración hacia la zona, afectando las formas tradicionales de vida de comunidades históricamente campesinas y rurales”²¹ (Sáenz, 1986, p. 43).

Estas intervenciones en el territorio fueron llevadas a cabo desde afuera y desde arriba, es decir, fueron agenciadas por actores externos (empresas con intereses económicos) en alianza

desigualdades reales en Colombia, mientras buscaba quitarle peso al discurso político de las insurgencias que se amparaba en la condición de marginalidad y en la injusticia social que experimentaba la población.

²⁰ Aquellos municipios que se ubican en el Altiplano de la subregión.

²¹ En la década de los setenta, se implementó el programa de Desarrollo Integral Rural en el Oriente antioqueño que terminó por afectar y transformar la agricultura tradicional y la economía campesina, pasando a implantar modelos de producción como el monocultivo, el latifundio y la utilización de los agrotóxicos (Sáenz, 1986, p.44).

con elites regionales y locales, sin tener ningún tipo de participación y mediación con las comunidades que tradicionalmente habitaban el Oriente antioqueño. La imposición de este modelo de desarrollo generó que la población se levantara en forma de protesta, dando apertura a un ciclo de movilizaciones sociales y fortalecimiento de la organización popular en la región, que en un primer momento mantuvo un carácter local. Durante 1960 y 1970 emergieron una serie de movimientos cívicos de carácter local y reivindicativo en el Oriente²², que eran impulsados por los habitantes de los municipios más afectados para manifestar su desacuerdo con las obras y exigir participación dentro de las decisiones que se tomaban sobre sus territorios. “Este es el caso de municipios como San Carlos, La Unión, Guatapé, El Peñol, San Rafael, Granada, Marinilla y La Ceja”²³ (Movete, 2018, pág. 28).

Para 1980, el conflicto por el alza en las tarifas del servicio de energía con la Electricidad de Antioquia tomó mayor fuerza, según Carlos Ruiz, uno de los líderes cívicos del Oriente antioqueño “las tarifas llegaron a tener un costo de hasta un 200% mayor a lo que valía en otras regiones y ciudades” (Ruiz, 1984, pág. 19). Esta problemática, consolidó el descontento popular hacia los poderes regionales y externos, que ya venía gestándose desde décadas anteriores, y catalizó una movilización de carácter regional. En varios municipios se decretó a través de las asambleas populares el no pago de servicios de energía eléctrica y se nombraron brigadas de reconexión como forma de protesta ciudadana. Todo esto teniendo en cuenta que “la empresa se había mantenido en la negativa de entablar algún diálogo o negociación con las comunidades sin atender sus demandas” (Movete, 2018, pág. 28).

En este contexto de movilización regional, se creó la Coordinadora Cívica regional, la cual se encargaba de dinamizar las decisiones que se tomaban en las asambleas populares de los

²² Desde el punto de vista de la tradición y experiencia en el campo de los movimientos cívicos, el Oriente Antioqueño se considera vanguardia en el departamento y la región que mayor nivel de organización ha alcanzado (Sáenz, 1986, p. 148).

²³ En 1963 comienza a proyectarse la construcción de la central hidroeléctrica del río Nare por parte de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), la cual impactaría los municipios de El Peñol, Guatapé y San Rafael. Los habitantes de esos municipios fueron los primeros en iniciar una resistencia organizada contra las centrales hidroeléctricas que querían imponerse en la región. Posteriormente, en 1970 se proyectaron nuevas hidroeléctricas en el municipio de San Carlos, donde las comunidades también iniciaron un proceso de resistencia y movilización en torno a la defensa de su territorio a lo largo de esta década. Por otro lado, Marinilla también fue epicentro de paros cívicos y protestas, una de las movilizaciones más importantes tuvo lugar en el año 1975 en contra de la Electricidad de Antioquia por los precios exorbitantes en los servicios de energía. Por su parte, los municipios de la Unión y La Ceja también realizaron paros y bloques en las vías ante el aumento desmedido de la población a raíz de la expansión urbanística e industrial desde el Valle de Aburrá.

municipios y de ser el órgano de representación regional en las negociaciones. De esta manera, entre 1982 y 1984 la Coordinadora, organizó tres paros cívicos en el Oriente antioqueño para presionar la negociación de un pliego de peticiones en el que se buscaba energía gratuita para los municipios y mayores beneficios económicos y sociales para aquellos territorios donde se ubicaban las represas construidas o en construcción. Estas movilizaciones tuvieron gran impacto no sólo en la región sino en todo el departamento y el territorio nacional. Sin embargo, a medida que la importancia del movimiento aumentaba, también lo hicieron los niveles de represión y persecución hacia sus figuras destacadas. A finales de 1983, fue asesinado en el municipio de San Carlos, Julián Conrado, el primer activista del Movimiento Cívico del Oriente antioqueño en ser ajusticiado. Posteriormente, días antes del tercer paro cívico, fueron asesinados tres dirigentes del Frente Democrático en Fredonia, y fue asesinada una persona en San Carlos en el marco de la movilización, por lo que municipios “como San Carlos, Granada y Marinilla se radicalizaron extendiendo el paro unos días más de lo previsto por la organización regional” (Olaya, 2012, p.116-119).

De acuerdo con Novoa (2009), durante este periodo empezó a gestarse una suerte de “guerra sucia”, que pretendía ser el método más eficaz para anular y neutralizar los procesos de organización, movilización y participación de los habitantes del Oriente Antioqueño. Estos hechos atroces iniciaron entre el segundo y tercer paro, “pero se consolidaron en el tercero y se prolongaron hasta el asesinato, desaparición y exilio de los principales dirigentes del movimiento cívico” (pág. 83). Así, el exterminio del Movimiento Cívico inició en la década de 1980 y se prolongó a lo largo de los noventa, siendo la radiografía de la persecución y represión de las alternativas políticas que en el territorio nacional pretendían disputar la configuración del *statu quo* y oponerse a las directrices de sectores de poder en el país que, anclados en una vieja práctica de eliminar al opositor político que pone en riesgo sus intereses, destruyeron la posibilidad de un juego limpio dentro de la democracia. Por otro lado, gracias a los esfuerzos de organizaciones de derechos humanos que buscan la verdad, la justicia y la reparación, la Unidad Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas emitió en enero del 2018 la resolución 2018-529²⁴, donde no solo reconoce el exterminio del

²⁴ De acuerdo con esta resolución: por lo menos 250 integrantes del movimiento entre los líderes y las bases sociales fueron asesinados, además dicho documento reconoce que los y las integrantes del movimiento sufrieron hechos victimizantes como “homicidios, torturas, desplazamientos forzados, allanamientos, amenazas contra la vida, retenciones ilegales y persecución” (Higueta, 2018, pág.13)

Movimiento Cívico en la región, sino que lo cataloga como víctima colectiva dentro del conflicto armado colombiano y, por tanto, como sujeto de reparación colectiva²⁵.

Este primer apartado, nos brinda un panorama sobre cómo se ha configurado el territorio y la política en el Oriente antioqueño: se ha pretendido imponer un modelo de desarrollo económico que se encuadra en una política elitista que pretende organizar y planear el territorio a su antojo. La otra cara de la moneda nos muestra la capacidad organizativa y de movilización por parte de las comunidades que de manera violenta experimentan la llegada de un modelo de desarrollo que para ellos resulta ajeno y extraño. Sin embargo, estas comunidades no agotaron sus repertorios en la protesta, sino que trascendieron hacia la propuesta, siendo capaces de construir “una propuesta política para la región, disputar el poder político a los gamonales del bipartidismo, ampliar la participación democrática y recrear otras formas de hacer política” (Arcila, 1987, pág.12-15).

Por otro lado, como lo plantea Clara Inés García, estas comunidades lograron “construir un sentido de lugar desde abajo” (García, 2007, pág.140), es decir, fueron capaces de construir un sentido de identidad y de pertenencia con su territorio, logrando posicionar al Oriente antioqueño como región claramente en disputa. Además, hacia el final del apartado, se nos muestra cómo el conflicto armado irrumpe en ese escenario de protesta y movilización social, dificultando la materialización de esos proyectos políticos alternativos. Estas características anteriormente mencionadas, serán importantes para comprender las dinámicas sociales y políticas que se gestan en el municipio de Sonsón y la manera en la que el conflicto también modifica las formas de hacer político y de estar en el territorio.

Las dos caras del conflicto armado en Sonsón: acciones armadas y repertorios de acción colectiva

Los dominios y los controles de los operadores de orden y violencia sean institucionales, conainstitucionales o parainstitucionales nunca logran imponerse del todo sobre la población y siempre encuentran formas de resistencia entre las personas.

María Teresa Uribe, 2006

²⁵ Actualmente, las nuevas generaciones que forman parte de la movilización social en el Oriente antioqueño trabajan en este proceso de reconocimiento como víctima colectiva.

“El viernes 23 de agosto de 1996 se inauguraron aquellas jornadas de horror con letreros pintados en las paredes del pueblo que decían: muerte a sapos y colaboradores de la guerrilla. Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá” (Gallego, 2019, pág. 5). Así relata el libro *Fin de semana negro* de Juan Camilo Gallego, la incursión del paramilitarismo en el casco urbano de Sonsón. Durante cuatro días largos días en agosto de 1996, Sonsón vivió lo que para mucho de sus habitantes significó el comienzo de la incursión paramilitar por disputar el control de la región a la guerrilla de las FARC-EP. Si bien hasta entonces, los habitantes del casco urbano del municipio veían lejos los embates del conflicto armado que vivían otras regiones, las dinámicas de la guerra en este territorio cambiarán de manera drástica cuando confluyan en el territorio tanto grupos paramilitares, como grupos guerrilleros (FARC-EP y ELN) y el Ejército.

Frente a las nuevas dinámicas de guerra que se gestaron en el territorio, los habitantes del municipio de Sonsón retomaron el legado de movilización social y formas de negociación del Movimiento Cívico de Oriente, para hacer frente a los embates del conflicto armado a través de acciones colectivas y repertorios de resistencia²⁶. Así, el municipio de Sonsón fue uno de los territorios del Oriente antioqueño donde estas acciones de resistencia y maneras de sobrevivir²⁷ caracterizaron el accionar de su población frente a la guerra. Por lo tanto, el conflicto armado en Sonsón tuvo dos caras: en la primera encontramos el enfrentamiento de los grupos armados y sus acciones de guerra que terminaron por victimizar a la población. Del otro lado, encontramos las acciones colectivas que pretendían neutralizar los efectos de las acciones bélicas sobre la población. Dicha ambivalencia se plasma en la siguiente línea del tiempo, la cual señala ambos procesos: en la parte izquierda se relatan todos los repertorios de resistencia y sobrevivencia llevados a cabo por la población sonsoneña, mientras que en la parte derecha se muestra el accionar de los diferentes grupos armados que tuvieron presencia en el territorio en el marco del conflicto armado.

²⁶ Resistencia se entiende aquí aquellas acciones de oposición, confrontación, inconformidad por parte de sujetos y colectivos, frente a estrategias de dominación de grupos armados relacionados con el conflicto armado, que involucran prácticas prioritariamente no violentas (García y otros, 2014, página 11). En este contexto ganan importancia el recurso de la palabra y el uso de prácticas convencionales como las marchas, los plantones, las huelgas, pero también otras más sorpresivas, creativas y simbólicas (CNMH, 2013, pág. 333).

²⁷ La guerra y la violencia asociada a ella imponen, más allá de la resistencia, unas prácticas de sobrevivencia en las que las negociaciones, los cruces, los acuerdos contingentes, los pactos y las alianzas transitorias resultan ser muy eficaces para protegerse, mantenerse con vida y poner algunos límites a las acciones de los grupos armados (Uribe de Hincapié, 2006).

Sonsón en contextos de guerra, paz y resistencia

En esta línea del tiempo se ofrece una vista panorámica de los eventos que marcaron al municipio de Sonsón en el contexto de la guerra en Colombia, asimismo, se retratan las acciones de memoria, resistencia y supervivencia de sus habitantes. Al igual que los obstáculos y disyuntivas que existen en este territorio para la construcción de paz,

1970



El Ejército de Liberación Nacional inicia operaciones en Río Verde de los Montes, Sonsón.

1977



Ramón Isaza, funda el grupo "Los Escopeteros", el cual operó en Sonsón, Puerto Triunfo, San Luis y San Francisco. Este se convertiría en Las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio.

Nace el movimiento político amor por Sonsón.



1991

1995



Comenzó a operar en Sonsón el Frente 47 de las FARC, comandando Elda Neyis Mosquera, alias "Karina"

1996



Las ACCU ingresan al casco urbano del municipio y asesinan a 8 personas y generan temor en la población. A este fatídico episodio que duró 3 días, se le conoce como "Fin de semana negro".

Se lleva a cabo la marcha por "La Esperanza y la Solidaridad" en el cementerio, en la cual participan más de 3000 personas; quienes marchan contra la guerra y en pro de la paz.



Se genera el desplazamiento forzado de la población en La Danta y Jerusalén debido a las amenazas del frente Carlos Alirio Buitrago del ELN.

2001

Se instala la Asamblea Comunitaria, a partir de la iniciativa de diferentes organizaciones comunitarias del municipio, con el fin de buscar la democracia y el desarrollo municipal.



El frente 47 de las Farc, incursiona en el casco urbano, atacando el comando de policía, asesinando a 2 personas y secuestrando a otras 2.

2002

Comienza la estrategia "jóvenes por la Paz", la cual capacita y brinda oportunidades laborales a jóvenes entre los 16 y 25 años; evitando que estos terminaran en uniéndose a grupos armados.



El Ejército Nacional asesinó a 18 personas que recibían instrucción paramilitar por parte de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio en la Pínera.

2003

Se llevan a cabo las jornadas de la luz, en las que se exponen las fotografías de las víctimas y se encienden velas con el fin de "apagar el miedo y encender una luz". Se realiza el evento "abriendo trochas por la vida", donde se hacen actos simbólicos en las veredas más golpeadas por el conflicto.



El Ejército Nacional inició la Operación Marcial en todo el Oriente Antioqueño. Fue comandado por el General Mario Montoya para combatir al frente 9 y 47 de las FARC, Carlos Alirio Buitrago y Bernardo López del ELN.

2004

2006



Las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, se desmovilizan en Puerto Triunfo. 990 de sus miembros de acogen a la ley de Justicia y Paz.

Se lleva a cabo, el programa "Provisame", el cual buscaba la formación de las mujeres del Oriente en el área psicosocial para prestar apoyo a grupos afectados por el conflicto armado.



2007



Alias Macguiver, comandante del Frente José Luis Zuluaga de las ACMM se entrega a la policía de Sonsón.

Se forma la Asociación de Víctimas por la Paz y la Esperanza de Sonsón como escenario para la reclamación de derechos, formación y visibilización de las víctimas.



2008



Alias "Karina", comandante del Frente 47 de las Farc, se entregó en la vereda la Soledad en Sonsón.

Se forma el Costurero Tejedoras por la memoria de Sonsón por mujeres de la Asociación de Víctimas, con el fin de fortalecer la construcción de memoria a través del tejido, el cual contó con el acompañamiento de el Instituto de Estudios Regional de la Udea.



2009

Surge el el archivo de ,la memoria de la Asociación de Víctimas, a través de un proyecto realizado por Gabriela Grisales y Carlos Ospina.



2010

Se inaugura el salón de la Memoria en Sonsón con la exposición "Tejer con hilo de memoria"

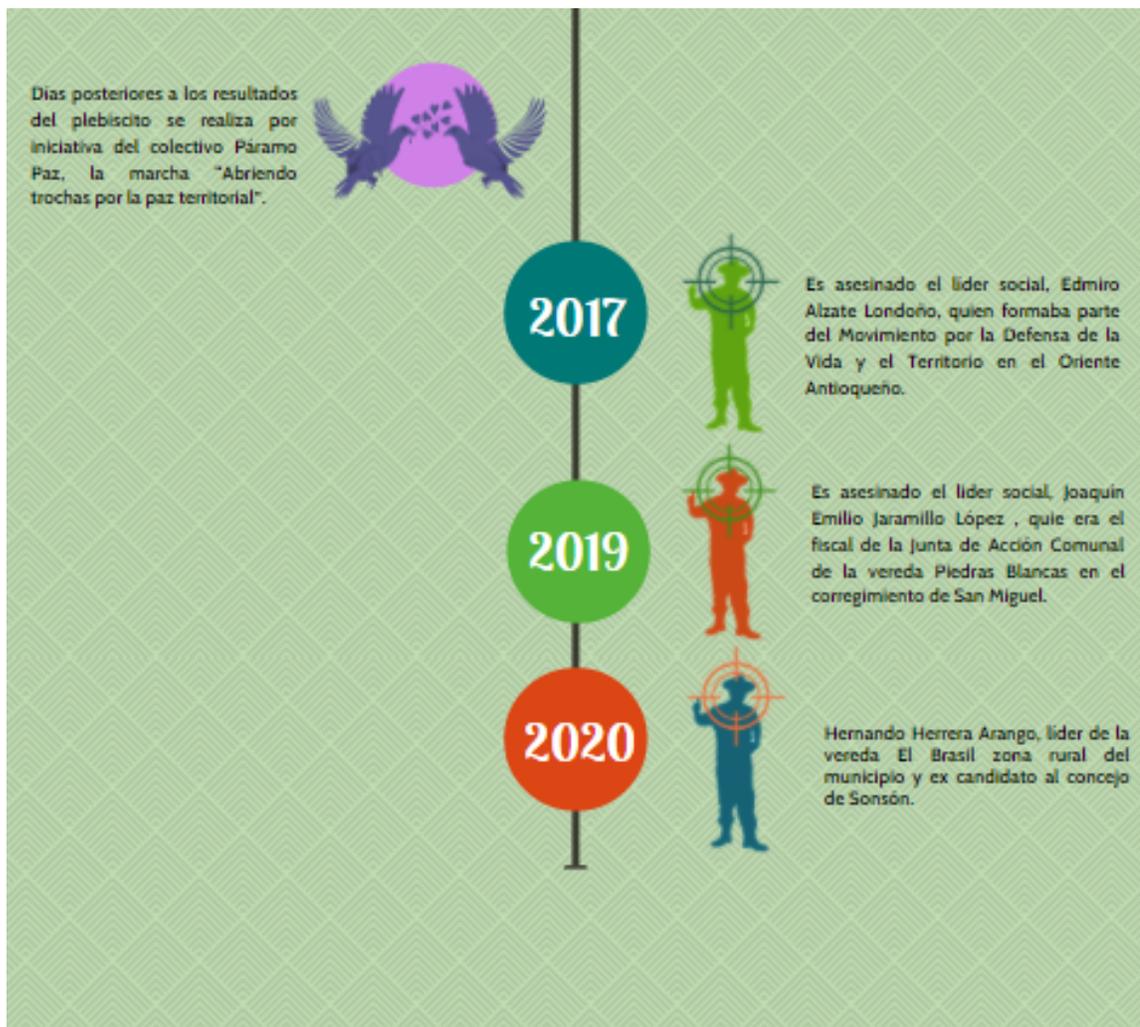


2015

En la referendación del acuerdo de paz en el municipio, el NO triunfó con el 73,85% , mientras que el 26,14% apoyaron el Si; contó con la participación del 34, 16 % de personas habilitadas para votar.



2016



Línea de tiempo elaborada a partir de información obtenida de fuentes secundarias y del trabajo de campo.

Esta línea del tiempo nos permite reflexionar sobre la presencia y accionar de los diferentes grupos armados en el territorio. Respecto a las guerrillas nos encontramos con que, en un primer momento, es el Ejército de Liberación Nacional (ELN) quien tiene presencia en el municipio. Para los años ochenta en las veredas de Palestina y Santa Marta, en Rio Verde de

los Montes, el ELN creó escuelas de formación política y militar. Además, se erigió como autoridad y paraestado llenando la ausencia o abandono institucional con su propia doctrina y pensamiento” (Gómez, 2008, pág. 28). Sin embargo, posteriormente fueron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) quienes ocuparon un papel central como insurgencia en el municipio. Hacia finales de los años ochenta, los frentes 9 y 47 de las FARC-EP, comenzaron a operar en el sur del Oriente Antioqueño, en Sonsón, Argelia, Nariño y San Francisco. En las veredas, El Popal, El Salado, Zurrumbal, La Torre y el Cedro “construyeron campamentos, internaron secuestrados, planearon operativos, mantuvieron el control y se extendieron al corregimiento Río Verde de los Montes en Sonsón, entrando en disputa con el ELN” (Gómez, 2008, pág. 30). Por lo tanto, el posicionamiento de las FARC-EP como la guerrilla más fuerte de la región contribuyó a la desaparición del ELN en el conflicto armado²⁸.

Respecto a los grupos paramilitares y el ejército, encontramos que los primeros tienen sus orígenes en el grupo de Los Escopeteros fundados por Ramón Isaza. Dicho grupo asume un carácter de autodefensa campesina: “una organización comunitaria, dedicada al servicio comunitario, cumpliendo funciones de creación y gestión de bienes y servicios públicos, entre ellos, el esencial, la seguridad” (Conciudadanía, 2019, pág. 25). Sin embargo, posteriormente mutaron y se constituyeron formalmente en una organización paramilitar, las denominadas Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM), quienes se encargaron de combatir la expansión guerrillera en la región y asumieron en muchos momentos el orden público, la construcción de infraestructura y expansión del modelo económico extractivista de la zona del Magdalena Medio sonsoneño. Respecto al Ejército Nacional, este tiene un papel primordial en el territorio a partir de la Operación Marcial que se desplegó en el Oriente antioqueño, dentro de los lineamientos de la política de Defensa y Seguridad Democrática, a partir del 2002. Sin embargo, dentro de su accionar también afectó a la población civil. Además, relevó a los paramilitares en la lucha contra la insurgencia tras el proceso de desmovilización²⁹.

²⁸ “El ELN desapareció por cuenta de las operaciones desplegadas contra él entre los años 1999 y 2001, por las FARC-EP y los paramilitares, que incluyeron eventos armados y masacres. Su desplome se produce antes de entrar en acción la política de Seguridad Democrática.” (Aramburo y García;2011, pág. 106)

²⁹ De acuerdo con Aramburo y García; (2011) “entre los años 2002 y 2003, la ofensiva del Ejército, inscrita en los inicios de las políticas de Seguridad Democrática, logró el control del eje vial, luego de la zona de embalses

Además, la avanzada del Ejército hacia las zonas de Bosques, Páramos y Embalses, y su enfrentamiento con las FARC, trajo consigo no solo el desplazamiento de gran parte de la población que habitaban estos territorios, sino diferentes tipos de victimización. Según el índice de impacto del desplazamiento, con base en la población de 1993: el “Oriente Lejano” muestra índices de desplazamiento que oscilan entre el 33% y el 116%. Por tanto, podría pensarse que, si bien la reducción de los eventos del conflicto armado en el Altiplano contribuyó a una recuperación en la estabilidad de la vida de la población y un mayor desarrollo económico en esta zona, esto no sucedió en los territorios del Oriente Lejano³⁰. En tanto, esta política de Seguridad Democrática trajo consigo el despojo y desplazamiento de los habitantes de esta zona, y los efectos de la “seguridad” que se procurarían en el mediano plazo, por sí solos, no producen el milagro del retorno y la reactivación. Además, para el 2005, y mientras que el Altiplano recuperaba el estado original de seguridad que presentaba en 1997, algunas zonas de las subregiones del Oriente Lejano para esta fecha aún cuentan con niveles importantes de desplazamiento forzado. Respecto al municipio de Sonsón, de acuerdo con el Registro Único de Víctimas para el año 2005 se reporta el desplazamiento forzado de 2.129 personas (ver anexo 1).

Por lo tanto, teniendo en cuenta la caracterización de estos grupos armados a partir de la línea del tiempo, es posible afirmar que el cese de la confrontación armada en el municipio de Sonsón no estuvo atravesado por procesos o diálogos de paz que permitieran una salida negociada a la situación de guerra. Por el contrario, tanto los grupos paramilitares como el Ejército se encargaron de exterminar a las guerrillas del territorio, lo cual tuvo un impacto no solo en los relatos que se construyeron frente al conflicto armado, sino también en las dinámicas de impunidad que pueden generarse en este tipo de situaciones.

y, finalmente, de la subregión de los páramos”. Por otro lado, los paramilitares se asientan en los cascos urbanos e inician su desmovilización desde finales de 2003. Por tanto, podría plantearse que “en la batalla destinada a acabar con el control de la guerrilla en la región se produce un relevo entre los paramilitares y las Fuerzas Armadas estatales” (Aramburo y García, 2011, pág. 54)

³⁰ “Los únicos municipios no afectados negativamente por el conflicto armado en términos de los ingresos de sus habitantes fueron los cuatro en los que se asienta el proceso de industrialización del Oriente antioqueño. Rionegro, al igual que La Ceja, Marinilla y Santuario, mantuvieron sus niveles de ingreso durante la escalada del conflicto y, antes bien, con la instauración de los nuevos niveles de seguridad ganados para el Altiplano a partir del año 2004, estos municipios comenzaron un ciclo de ascenso significativo” (Aramburo y García; 2011, pág. 115).

Por otro lado, situándonos en la parte izquierda de la línea del tiempo que caracteriza las acciones realizadas por la población civil podemos decir que las víctimas y los líderes sociales del municipio han puesto sobre la mesa la discusión sobre el conflicto armado y han buscado que el rótulo de víctima se distancie de una categoría de sumisión y pasividad, proponiendo así su manera de comprender el conflicto y sus estrategias para sobrevivir, superar, reparar, hacer justicia y tramitar los embates de la guerra en su territorio y en su diario vivir. Prueba de ello, es el archivo de la memoria del municipio, que resulta ser una fuente de información esencial para la reconstrucción de la memoria histórica y las luchas políticas, al convertirse en un insumo importante para el esclarecimiento de los hechos durante el conflicto armado y un apoyo para las víctimas al momento de hacer las reclamaciones pertinentes ante las entidades encargadas de las reparaciones administrativas. Finalmente, es importante resaltar que, aunque en el municipio de Sonsón ya no existe una confrontación armada como la que se presentaba a finales de los noventa y principios de los 2000, puede apreciarse en la línea del tiempo que en los últimos años se siguen presentando dinámicas de persecución y ajusticiamiento hacia líderes sociales y defensores de derechos humanos que se oponen a la nueva oleada de imposición de megaproyectos, que surge tras la pacificación armada que se da en el territorio. Así mismo, el poder de economías de microtráfico en el casco urbano, han contribuido al incremento de hechos violentos en el municipio.

Actores armados en el municipio de Sonsón: ambigüedades, diferencias y relacionamiento con la población.

Los actores armados se convierten en un proto-estado con la función semi-estatal de ofrecer orden y seguridad a cambio de lealtad incondicional y obediencia absoluta, en suma, un embrión de Estado.

Bolívar, González y Vázquez, 2003.

“Entonces usted iba subiendo por la vereda con el mercado que traía del pueblo y esos uniformados lo paraban y se lo quitaban, porque decían que usted le estaba llevando comida a la guerrilla, que usted era auxiliador de la guerrilla” (Entrevistado 5, 2019). Esta es solo

una de las tantas anécdotas que durante el trabajo de campo me ayudaron a armar el rompecabezas del paso de la guerra en Sonsón. Una guerra en la cual, la población civil, y sobre todo los campesinos de las zonas más alejadas del municipio, tuvieron que experimentar las lógicas de autoridad y dominación de los diferentes grupos que se disputaron el territorio: las guerrillas, los paramilitares y el ejército. Sin embargo, cada uno de estos grupos tuvo una forma particular de relacionarse con la población y de disponer del territorio, generando unas lógicas que marcaron las dinámicas de la guerra en diferentes zonas del municipio. Para poder entender estas dinámicas es necesario en primer lugar, entender en dónde se ubican estos grupos y cuáles fueron sus motivaciones. Por lo tanto, a continuación, se presenta una tabla con el compendio de actores armados que hicieron presencia en el territorio.

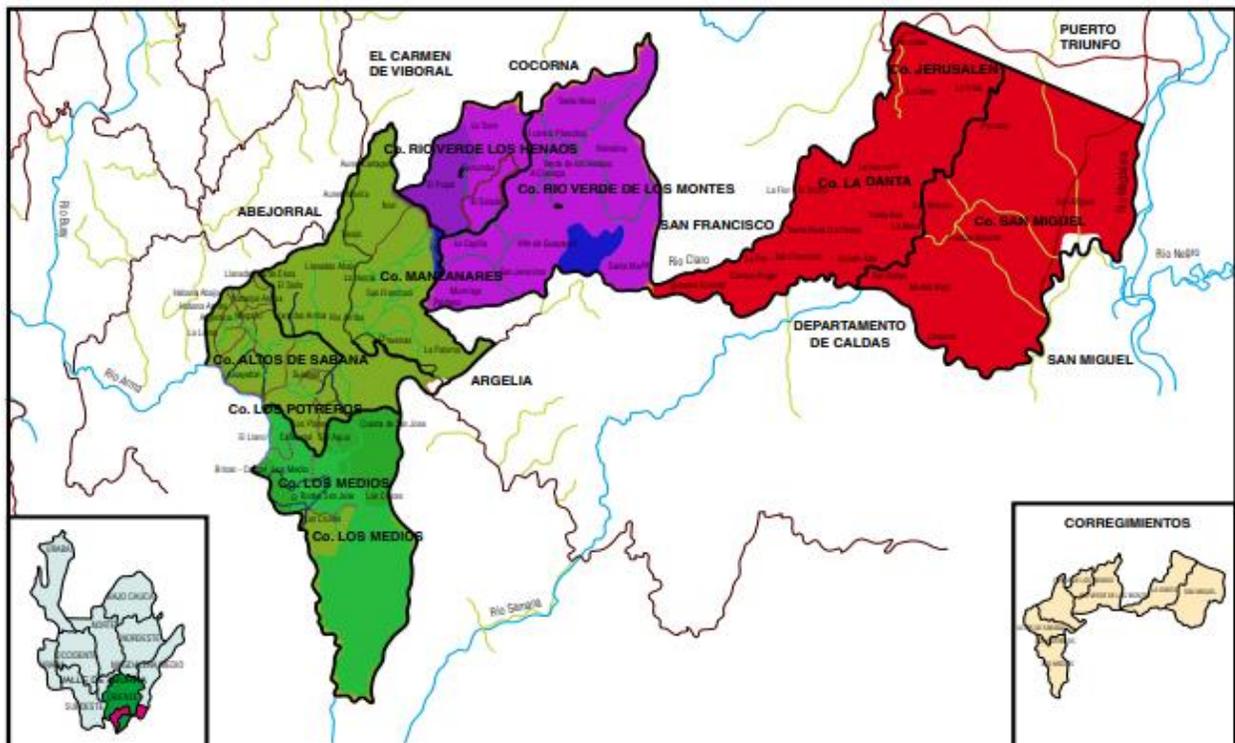
Tabla 1

Actor	Tiempo	Finalidad
ELN	1986- 2002	Tras el exterminio del movimiento cívico de Oriente en los años 80, algunos de sus sobrevivientes optan por alzarse en armas para buscar el cambio social. Pretenden consolidar una base política tomando como ventaja los lazos de parentesco existentes con los habitantes del territorio.
FARC-EP	1987- 2007	Modifican su plan estratégico a partir de la séptima y octava conferencia, en donde se plantea un “nuevo modo de operar”, lo cual se concreta en la creación de bloques y comandos conjuntos, con el fin de regionalizar la organización y lograr una avanzada en el control territorial.
PARAMILITARES	1984-2006	Surgen en el municipio de Sonsón a comienzos de los ochenta a manos de Ramón Isaza, quien forma un grupo con el fin de combatir a los guerrilleros que practicaban la extorsión y el robo de ganado en la región, ofreciendo sus servicios de seguridad privada. Posteriormente, esta organización mutará y se convertirá en las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM).

EJÉRCITO	2002-2007	Con el inicio de la política de Defensa y Seguridad Democrática en el 2002- 2003, se llevan a cabo grandes ofensivas militares, donde la Fuerza Pública pretende ganar el control del eje vial que está bajo el dominio guerrillero. Posteriormente, las operaciones se centran en la recuperación del control de la subregión de Páramos, en la parte sur del territorio.
----------	-----------	--

Elaboración propia a partir del trabajo de campo y la bibliografía consultada.

Mapa 1:



Fuente: Instituto Popular de Capacitación, 2011.

En la zona de color morado formaron sus lugares de asentamiento las guerrillas de las FARC-EP y el ELN, en la región páramo del municipio. Por su parte, los paramilitares se asentaron en la zona de color rojo, ubicada en las tierras cálidas del municipio en el Magdalena Medio. Sin embargo, los paramilitares también tuvieron presencia importante en el Alto de Sabanas (un corregimiento ubicado en la región páramo), donde, incluso, tuvieron una emisora. Por otro lado, el ejército entró con fuerza en los lugares de la zona páramo donde se ubicaban las guerrillas para emprender su lucha contrainsurgente.

De acuerdo con el mapa anterior, puede concluirse que Sonsón es un municipio amplio en extensión territorial, en el que se presentaron dinámicas del conflicto armado disimiles de acuerdo con la ubicación geográfica y la presencia de actores armados en el territorio. Por lo tanto, en las zonas de asentamiento de paramilitares y los grupos guerrilleros se presentarán maneras de estar en el territorio y de relacionarse con la población de manera específica. De acuerdo con Cárdenas (2015), en los territorios en los que se asientan los grupos paramilitares, por lo general se presentan inversiones en grandes monocultivos, ganadería extensiva y grandes proyectos, dándose una gran valorización de la tierra, mientras que en los lugares donde se ubican las guerrillas, existen casos en los que se llegaron a consolidar comunidades campesinas que se dedicaron a la agricultura a pequeña escala y en muchas ocasiones al cultivo de la hoja de coca, generándose habitualmente un proceso de desvalorización de la tierra. Por lo tanto, a continuación, se observarán estas lógicas disimiles de conflicto armado en el municipio de Sonsón, según la presencia de los actores armados y su ubicación geográfica en el territorio.

FARC- EP y ELN en el municipio de Sonsón

En primer lugar, cabe resaltar que el oriente antioqueño ingresa en las dinámicas del conflicto armado de una manera tardía. Pues si bien, en esta subregión existen asentamientos guerrilleros hacia finales de los setenta, no fue sino hasta finales de los noventa que se presenta no solo una expansión de estos grupos por el territorio, sino una disputa por el poder entre estos grupos y el Estado. Sin embargo, estas dinámicas de disputa serán diferentes para estas dos guerrillas. Como se menciona en la tabla 1, las dinámicas de guerra de las FARC-EP cambian a partir de la Séptima y la Octava Conferencia. En la Séptima Conferencia que tiene lugar en 1982, las FARC se constituye formalmente como un ejército, pues hasta entonces operaba como una autodefensa campesina³¹. Por lo que, este encuentro puede verse como el perfeccionamiento del cambio relevante que diera la Sexta Conferencia, el salto en su evolución como organización armada insurgente (Sanabria, 2019). Para llevar a cabo este cometido, amplían sus filas a 28.000 miembros armados, creando además 48 nuevas

³¹ “Antes de la Séptima Conferencia, las FARC, contaban con poco menos de 1000 integrantes, un grupo que apenas era capaz de desarrollar acciones armadas contra la Fuerza Pública y efectuar algunos actos terroristas. Su supervivencia dependía de operar en áreas remotas donde hubiese falta de atención o voluntad política del Estado colombiano para hacer presencia policiva” (Sanabria,2019)

cuadrillas militares con el fin de expandirse por todo el país. Además, desarrollan un esquema de organización política clandestina y los métodos de difusión ideológica, los cuales evidentemente traerían un avance intangible en el campo estratégico, al superar estadios anteriores orientados hacia un componente mayoritariamente militar, como se ha evidenciado en las conferencias anteriores (Sanabria, 2019). Por otro lado, en esta Conferencia, siguiendo la línea de un fortalecimiento a nivel político e ideológico, las FARC agrega a su nombre la denominación: *Ejército del Pueblo*, con lo cual busca sellar el carácter político de la organización³².

Para la Octava Conferencia de 1993, las FARC-EP contaban con un crecimiento importante y se habían establecido en buena parte del territorio nacional. Sin embargo, se caracterizaban por acciones militares espontáneas contra el ejército y los paramilitares, por la toma de pueblos y emboscadas, todas ellas operaciones un tanto aisladas. Pero a partir de ese momento, se reflejó una dinámica diferente en su concepción militar. Con esta nueva conferencia, dejan de ser una guerrilla de carácter defensivo para convertirse en una ofensiva. Por lo tanto, se proponen aumentar su número de frentes de 46 a 61 y deciden fortalecer la estrategia de columnas y compañías móviles; además de que sus planes militares partirán de estudios de inteligencia diseñados y estudiados por los frentes, los cuales serían orquestados en una escuela militar creada para tal fin. Por lo tanto, a partir de esta conferencia, se presenta un giro estratégico en el accionar de las FARC-EP, pues se rompe con el esquema tradicional de la guerra de guerrillas, y se transita hacia una estrategia militar de guerra de movimientos³³, que pretende la creación de frentes "madres" y sus desdoblamientos, la consolidación de las zonas de retaguardia, el aseguramientos de corredores estratégicos y la disputa de otros territorios. Por otra parte, en ese mismo año, se oficializa la ruptura entre

³² Por supuesto, este carácter político hace parte importante del entramado de su estrategia, pues es la carta de navegación de cualquier movimiento revolucionario que pretende llegar al poder.

³³ Toda guerra consistente en campañas y combates ofensivos de decisión rápida en líneas exteriores dentro de una guerra defensiva prolongada en líneas interiores en el plano estratégico toma necesariamente la forma de guerra de movimientos. Esta es una forma de guerra en que los ejércitos regulares efectúan campañas o combates ofensivos de decisión rápida en líneas exteriores a lo largo de amplios frentes y en vastas zonas de guerra. Al mismo tiempo, comprende la "defensa móvil", que se aplica en caso de necesidad para facilitar tales operaciones ofensivas, así como el ataque y la defensa de posiciones, los cuales desempeñan un papel auxiliar. Las características de la guerra de movimientos son: ejércitos regulares, superioridad de fuerzas en campañas y combates, carácter ofensivo y movilidad (Zedong, 1976, pág 177).

esta guerrilla y el Partido Comunista Colombiano (PCC)³⁴, ya que, a partir del genocidio de miembros de la Unión Patriótica a manos de paramilitares, narcotraficantes y agentes estatales, la postura de las FARC-EP se radicaliza y decide apuntar hacia una guerra total³⁵. Por lo tanto, esta guerrilla tuvo un marcado enfoque militarista cuando se asentó en el municipio de Sonsón, lo que generó que se comportara como un ejército de ocupación que desconfiaba de los pobladores de estos territorios y que llegó a considerar como objetivo militar a aquellos líderes sociales y funcionarios públicos que fueran sus detractores. Por tanto, el accionar de esta guerrilla atentaba de manera más directa contra la vida de la población, lo cual se tradujo en bombardeos, reclutamiento forzoso, homicidios, entre otros.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN), por el contrario, buscó inicialmente establecer relaciones de diálogo y negociación con la población. Al contar con ex miembros del Movimiento Cívico en sus filas, tenían un enfoque diferente a la otra guerrilla. Este grupo insurgente, abogaba por la movilización de la población dando lugar espacios de participación comunitaria y permitía acercamientos humanitarios con las autoridades locales. Sin embargo, las dinámicas bélicas y la relación con la población mutaron en las filas del ELN con el escalamiento del conflicto en el Oriente antioqueño, lo cual se tradujo en la utilización de los mecanismos de guerra promovidos por las FARC-EP. Al confluir ambas guerrillas en el territorio rural de Río Verde de los Montes y de los Henaos en el municipio Sonsón, sus diferencias políticas y militares los llevaron a disputarse el control de este territorio³⁶. Finalmente, con la paulatina desaparición del frente Carlos Alirio Buitrago del

³⁴ El Partido Comunista Colombiano (PCC), que había promovido directamente la conformación de las FARC-EP a través de su activismo político, estuvo de acuerdo en adoptar al grupo como su brazo armado bajo el emergente dogma de “todas las formas de lucha”, según el cual las metas políticas debían perseguirse tanto a través de la violencia como en las urnas (Medina, 1989, p.9). Sin embargo, termina por escindirse de las FARC-EP, cuando esta organización adopta un enfoque de guerra total.

³⁵ El distanciamiento con el PCC llevó a un hondo proceso de militarización. Según Pizarro (1991), las FARC-EP dejaron de ser una “guerrilla de partido” para convertirse en una “guerrilla militar”, dado que el secretariado de las FARC asumió simultáneamente la dirección política y militar. Es decir, la dependencia del PCC se rompió y comenzó un proceso de sustitución por el denominado Partido Comunista Clandestino de Colombia, bajo la dirección directa del secretariado. A su vez, la muerte de Jacobo Arenas en 1990, el indiscutible líder político, también contribuyó a la militarización de las FARC-EP.

³⁶ De acuerdo con el Observatorio de paz y reconciliación del Oriente Antioqueño (2008, pág. 26), en el computador del fallecido guerrillero del secretariado de las Farc Iván Ríos se hace evidente el enfrentamiento político e incluso militar entre las FARC y el ELN; en una de las frases se lee, por ejemplo: “Sobre la situación con los elenos, les comento lo siguiente: La política por el momento sigue siendo ‘como nos traten, los tratamos’, o sea que allá no vamos a atacarlos sin motivos en la misma zona. Pero, es muy importante que todos nuestros mandos tengan claro que ellos son muy diplomáticos y aparentan ser *superfraternales*, pero internamente se consideran la estrategia única y acertada y nos consideran equivocados y militaristas”.

ELN, fueron el frente 47 de las FARC-EP y las Autodefensas del Magdalena Medio quienes protagonizaron la confrontación armada en Sonsón.

FARC- EP en el municipio de Sonsón: ¿Más que un ejército de ocupación?

Como se mencionó en líneas anteriores, en la Octava Conferencia (1982), se optó por un robustecimiento de los frentes, para el caso de Antioquia y Chocó, surgen el 34, en los límites con el Chocó entre el Atrato y el Darién; y los frentes 35, 36, 37, en el Nordeste antioqueño. Por su parte, surge el Frente 47 que en un principio operó en el Magdalena Medio y luego, en la década del noventa, se asentó en algunos municipios del suroeste y en el oriente lejano de Antioquia. Para 1997, se llevó a cabo una reunión del Bloque José María Córdova (posteriormente denominado Bloque Iván Ríos), en la que se decidió desplegar una ofensiva en Antioquia. Para estas incursiones se designaron a los frentes 9 y 47. Mientras que el Frente 9 se expandió hacia San Luis, Cocorná, Concepción y Alejandría; el 47 lo hizo hacia Argelia, Nariño, Sonsón y San Francisco. Así, el Frente 47 se propuso expandirse del Lejano Oriente hasta el nordeste de Caldas, buscando también ganar adeptos entre la población civil. Sin embargo, sus métodos de guerra concentrados en la desaparición forzada, el secuestro, el reclutamiento de menores de edad y la toma de poblaciones sabotearon su objetivo de conectarse políticamente con los pobladores.

El municipio de Sonsón experimentó la arremetida del Frente 47 de las FARC a manos de Elda Neyis Mosquera García “alias Karina”, quien montó uno de sus campamentos en Río Verde de los Montes en Sonsón, desde donde dominaba Nariño y Argelia, en Antioquia, y Samaná, San Félix, Pácora, Aguadas y Pensilvania, en Caldas. De acuerdo con los testimonios de los pobladores, esta guerrilla investigaba quiénes eran las personas que vivían en la región, realizaban censos y llevaban un registro de quienes salían o entraban al territorio. Por otro lado, se encargaban de manejar los conflictos entre vecinos y de delincuencia común, conversando con las partes implicadas o en última instancia expulsando de la zona a aquellos habitantes que consideraban problemáticos. Por lo que, “las organizaciones insurgentes van configurando un orden interno predecible, logran así cierto reconocimiento para dirimir conflicto, controlar la delincuencia menor y organizar la población en el territorio” (Bolívar, González y Vázquez, 2003, pág. 201). Por lo tanto, como plantean (Bolívar, González y Vázquez, 2003, pág. 201), se convierten en un proto-estado con la función semi-estatal

de ofrecer orden y seguridad a cambio de lealtad incondicional y obediencia absoluta, en suma, un embrión de Estado. Respecto a la lealtad condicional y obediencia absoluta, uno de los habitantes de Río Verde de los Montes, me narró qué:

esa gente de la guerrilla usaba los registros que tenían de la gente de la vereda para mirar quienes le cargaban la comida desde el pueblo. Como yo era arriero, me obligaban a traer mucha comida y una vez me paró el otro grupo (los paramilitares) y me amenazaron. Y yo fui y les dije lo que pasó y ellos me dijeron que yo estaba con ellos o contra ellos. Entonces, yo mejor me fui de la zona (Entrevistado 10, 2019).

De acuerdo con el relato anterior y los demás testimonios recogidos de líderes sociales y campesinos que conocen o habitaron la zona de Río Verde, el importante desplazamiento que se presentó en esta zona rural del municipio, responde en gran medida a las disputas territoriales entre los paramilitares y la guerrilla, quienes presionaban a los habitantes para tomar partido en la confrontación armada. Así, la población vivía en medio de un contexto de violencia, conviviendo con diferentes actores armados que los vigilaban, entraban a sus casas a pedir comida o posada, los interrogaban, reclaman su lealtad y hasta los acusaban de auxiliar al bando contrario. Por otro lado, la guerrilla de las FARC-EP, sembró zozobra en este territorio con prácticas como el secuestro y la extorsión, de acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, en los municipios de Antioquia en los que el Frente 47 tuvo presencia, Sonsón fue el más afectado con 91 secuestros entre 1982 y 2010, con un pico que empezó en 1999 y se extendió hasta el 2001 (Conciudadanía, 2019). Por otro lado, generaron dinámicas de desplazamiento forzado, reclutamiento de menores e instalaron minas antipersonales para combatir al ejército y a los paramilitares, donde, la población civil terminó por ser víctima de esta táctica de guerra.

Paramilitares en Sonsón: orden, despojo y modelo económico

Como se menciona en la tabla 1 y brevemente en el apartado anterior, los primeros brotes de un proyecto paramilitar en el municipio surgen a partir del grupo *Los Escopeteros* formado

por Ramón Izasa en el Magdalena Medio para ofrecer servicios de seguridad y vigilancia³⁷, ante el accionar guerrillero³⁸. Dicho grupo pasó de tener pretensiones de autodefensa a constituirse formalmente en un grupo paramilitar, el cual fue conocido como Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM). Como se aprecia en el mapa 1, este actor armado se ubicó en la zona cálida de Sonsón, más exactamente en los corregimientos de San Miguel, La Danta y Jerusalén.

Antes de continuar, es importante mencionar que las dinámicas territoriales que se establecen en esta zona cálida del municipio distan de las existentes en la zona páramo, donde se ubicaron las guerrillas. Por lo tanto, como plantea Madrigal (2018), la desconexión regional que existe entre ambas zonas, así como la falta de convergencia en sus dinámicas comerciales y económicas, conllevó a que esta parte del municipio asumiera por cercanía y/o distancia, lógicas de la región del Magdalena Medio, región con la que comparte rasgos socioeconómicos que contribuyeron a su configuración y consolidación como territorio. Estas lógicas territoriales y económicas adquirieron unas dinámicas durante el conflicto armado, las cuales fueron marcadas por la presencia paramilitar en la zona y las necesidades de este actor armado para financiar su proyecto político-militar en el territorio. Por otro lado, cabe destacar que esta zona del municipio de Sonsón al estar tan alejada del casco urbano fue el lugar perfecto para que el paramilitarismo ejerciera dominio, ya que lograron establecerse como autoridad en una zona donde la población no contaba con unas necesidades básicas resueltas y donde la presencia de las autoridades municipales era de carácter transitorio.

En la década de los noventa, las ACMM se consolidaron en el territorio al encontrar nuevas fuentes de ingreso que soportaran la financiación de la estructura. Para ello, debieron recurrir a otro tipo de economías, como la explotación minera, el petróleo y la coca. Por tanto, el cobro a ganaderos, hacendados y comerciantes pasó a ser una fuente secundaria toda vez que lograron consolidar otro tipo de actividades económicas a partir de las dinámicas del despojo

³⁷ Se puede afirmar que las formas armadas privadas son parte de la historia nacional colombiana probablemente desde mediados del siglo XIX. Fueron institucionalizadas en el contexto de la Guerra Fría en la década de 1960, haciéndolos parte de las acciones de las fuerzas armadas para el control de orden público, la defensa de la propiedad y la lucha contra las guerrilleras. Esta modalidad de violencia privada se diversificó por el territorio, en el siglo XX se concentró preferentemente en el nordeste en las regiones del Magdalena Medio, Córdoba y Urabá. Las AUC, en consecuencia, fueron tributarias de esta tradición y continuidad histórica.

³⁸ En el corregimiento de La Danta a finales de los años setenta principios de los ochenta empezaron a entrar los grupos guerrilleros a la zona.

y el abandono, y de la asociación con propietarios de empresas, industrias y una red de poderes locales. Todo eso lo lograron, gracias a que según Madrigal (2018), “en la zona se estableció una red de testaferros que sirvieron a las ACMM para el despojo de tierras, dichas zonas despojadas se convirtieron en sitios de explotación ganadera como forma de lavado activos o de actividades asociadas al narcotráfico” (pág. 40). Por tanto, el resultado del control de la economía por parte de los paramilitares se debe a la consolidación de un “capitalismo político donde la disponibilidad de aparatos armados, la influencia sobre el poder político regional, la generación de ingresos desde actividades ilícitas-lícitas y el respaldo de las comunidades, eran el eje de la estructura productiva y distributiva de la riqueza” (Duncan, 2015, pág. 106).

Así mismo, otras economías extractivas, como la marmolera y la aurífera, llamaron para este período la atención de los paramilitares. Este es el caso puntual de Luis Eduardo Zuluaga Arcila, alias “McGiver”, quien mostró interés por forma parte de la empresa encargada de la explotación de las minas de mármol ubicadas en la cabecera del corregimiento de la Danta. De acuerdo con Madrigal (2018), estos territorios eran explotados tanto por colonos, como por empresas y sociedades que se constituyeron con el fin de aprovechar el material, el cual abundaba en el sitio. Así, de acuerdo con los testimonios de la población, alias “McGiver”, habría apoyado la organización de los mineros en una cooperativa de trabajo asociado que se denominó: Asociación de Marmoleros de La Danta (ASOMARDANT), con el fin de tener control sobre las minas de explotación de mármol y hacerse con los réditos económicos que esta actividad extractiva generaba.

Con la hegemonía alcanzada por las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio y en general, del paramilitarismo en la región del Magdalena Medio, se generaron procesos de despojo³⁹ y abandono que devinieron en dinámicas de acumulación de tierras⁴⁰ en los

³⁹ “es la acción por medio de la cual a una persona se le priva arbitrariamente de su propiedad, posesión, ocupación, tenencia o cualquier otro derecho que ejerza sobre un predio; ya sea de hecho, mediante negocio jurídico, actuación administrativa, actuación judicial o por medio de algunas acciones tipificadas en el ordenamiento penal y aprovechándose del contexto del conflicto armado” (CNRR, 2009, pág. 25).

⁴⁰ “Durante este período, es importante evidenciar que entre 1996 a 2004 se registró un aumento en el Gini de tierras en Antioquia. En relación con el Magdalena Medio antioqueño se tuvo que de un índice de 0.710% registrado en 1996, se pasó a un índice de 0.750 en 2004. Lo anterior, muestra cómo del lado del fortalecimiento y crecimiento de la hegemonía paramilitar, en el caso específico de estudio, la proporción en la concentración de la tierra aumentó” (Madrigal, 2018, pág. 36).

corregimientos de la Danta, Jerusalén y San Miguel, ya que esta autoridad de facto influyó en las dinámicas económicas y de uso del suelo de esta región. Estas dinámicas de despojo y abandono estuvieron atravesadas por amenazas, homicidios, venta forzada, muerte de semovientes, hechos de violencia sexual, entre otros. El relato de unos de los voceros que formaron parte del proceso de desmovilización de los paramilitares en el Magdalena Medio describe algunas de estas dinámicas:

“Yo vivía en el corregimiento de la Danta con mi mamá; mi papá ya había muerto hace unos años. Por allá como en 1997 se nos estaba perdiendo el ganado. Un día vinieron los muchachos de Ramón Isaza y nos dijeron que la finca tenía comprador. Nos hicieron ir a la notaría y tuvimos que firmar bajo presión unas escrituras. Nos dijeron que en un mes nos entregaban la plata de la finca, pero nunca nos dieron nada. Y nos tuvimos que ir para el corregimiento de San Miguel a vivir con mi tío. Y eso que no fuimos los únicos a los que les pasó algo así” (Entrevistado 15, 2019).

Además, de acuerdo con el testimonio de un habitante que se desplazó del Magdalena Medio al casco urbano del municipio de Sonsón, con la reconfiguración territorial y económica que se dio durante el dominio paramilitar, se trastocó la vocación productiva del suelo, la cual terminó por afectar las condiciones de subsistencia de los campesinos:

“Yo vivía en el corregimiento de San Miguel, eso allá estaba llenito de cultivos de yuca, maíz y arroz, pero cuando la gente de Isaza empezó a mandar por ese lado, se nos acabó el trabajo jornaleando, porque fueron comiendo y comiendo terreno hasta que sacaron a los campesinos de esa zona. Entonces, uno ya veía era puras vacas y hasta coca” (Entrevistado 5, 2019)

Retomando los hechos que narra el entrevistado, no es sorprendente que exista una reconfiguración de la economía y de la vocación del suelo que propenda por la realización de megaproyectos y de actividades económicas que impliquen la concentración de predios y de gran capital en la zona del Magdalena Medio, ya que los territorios que fueron “producto del despojo paramilitar, presentaron una economía creciente, se hicieron inversiones en grandes monocultivos, ganadería extensiva y grandes proyectos, dándose por regla general una gran valorización de la tierra” (Cárdenas, 2015, pág. 162).

Por otro lado, al mismo tiempo que los paramilitares infundieron terror, zozobra y muerte en los territorios del Magdalena Medio sonsonense, lograron consolidar una suerte paraestado⁴¹, al ser capaces de entronizar un poder económico, político y social de tal significancia que poseen “un control casi que absoluto sobre una gran parte del territorio y en éste imponen sus leyes y normas, como lo haría cualquier Estado” (Ortiz, 2010, pág. 79). Así, tuvieron la capacidad de tomar decisiones, hacer inversiones, cuestionar a funcionarios públicos y lograr imponer su autoridad ilegal, ante la legitimidad del gobierno local. Además, a partir de 1996, las ACCM retomaron la ejecución de obras públicas como lo fueron: la construcción de escuelas, la pavimentación de vías veredales, la adecuación de centro de salud. Por lo tanto, algunos de los pobladores de la región, encontraron en el proyecto paramilitar una forma de mejorar sus condiciones de vida en las veredas y en aquellas zonas que se encontraban tan alejadas del casco urbano del municipio de Sonsón. Al respecto, María Teresa Uribe (2001), expresó que el poder que atraviesa a las organizaciones armadas, no se logra únicamente a través de la coerción y la represión; sino que también se manifiesta en forma de consensos. Puesto que este poder, supone un acuerdo de facto entre las masas con el grupo dominante, o mejor aún, con el proyecto político de la organización que está en la cúspide de las relaciones de poder. Por lo tanto, cuando esto ocurre estamos frente a una hegemonía política⁴².

Visiones de la justicia, la paz y la reparación en el municipio de Sonsón

Queremos que nos oigan, por qué quien más que nosotras para saber lo que pasó y lo que necesitamos. Nosotros lo que buscamos es la verdad, la dignidad, que podamos vivir mejor que en el campo, sin pasar necesidades” (miembro del costurero de Tejedoras por la Memoria de Sonsón, 2020)

Teniendo en cuenta las dinámicas de violencia y resistencia en el municipio de Sonsón, en este trabajo intenté conocer las visiones de justicia, paz y reparación de los habitantes del

⁴¹ “Los paraestados surgen bien sea porque el Estado legalmente constituido cede poder a un grupo insurgente o, simplemente, porque establece acuerdos para el control ante el embate de un opositor que le quiere arrebatar a través de la violencia los derechos que por Constitución le pertenecen.” (Ortiz, 2010, pág. 82).

⁴² El concepto de hegemonía en Gramsci se refiere a la estrategia desplegada por un determinado grupo social para generar la aceptación de sus propias posiciones ideológicas entre los otros grupos sociales por medio de la persuasión y el consenso, a través de lo cual esa clase social logra establecer su dirección o liderazgo ideológico sobre las otras clases sociales.

municipio de Sonsón. Esto partiendo de la agencia política de los sujetos entrevistados y de las apuestas que se han vuelto constantes en el municipio desde la década del 2000 por rescatar la memoria de lo sucedido y establecer formas distintas de relacionarse con el pasado. A continuación, profundizo en dichas visiones.

Visiones de la justicia en el municipio de Sonsón: perspectivas “desde arriba” y “desde abajo”

Durante los últimos veinte años, la justicia transicional ha llamado la atención de expertos en estudios de paz y derechos humanos, académicos, movimientos sociales y diseñadores de políticas públicas, que desde diferentes escenarios han reflexionado sobre los procesos sociales, jurídicos y políticos que entrañan los reclamos de justicia de las comunidades frente a la comisión de violaciones a derechos humanos. De acuerdo con Gómez (2015), el término justicia en estos procesos de transición, ha estado usualmente asociado a la idea de justicia retributiva, la cual se relaciona con los mecanismos judiciales que permiten procesar y castigar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos. Sin embargo, la predominancia de la justicia retributiva en los procesos de transición política, que tuvieron cierta aceptación en los momentos iniciales de la formación del campo de justicia transicional, han sido objeto de múltiples debates, especialmente a lo largo de la última década.

Por lo tanto, en los últimos años, la justicia transicional se ha convertido en un escenario de disputa en el que confluyen diferentes actores con discursos y propuestas que pretenden orientar los mecanismos jurídicos y políticos para responder a las demandas de paz y de justicia que se presentaron en territorios de gran conflictividad. Por lo que, los actores sociales entran en una intensa disputa sobre “cómo definir el conflicto político, la instauración del nuevo momento fundacional y, de qué manera los mecanismos legales deben diseñarse para promover y facilitar los eventuales acuerdos políticos” (Gómez, 2015, pág. 148). Es en este escenario donde surgen visiones contrapuestas entre los intereses de los grupos de poder y las perspectivas de las víctimas o de los grupos social y políticamente excluidos, entonces: ¿Qué ocurre cuando las élites políticas optan por establecer formas de justicia afines a sus intereses y que no tienen presentes las prerrogativas de las víctimas y de

los sectores más marginados? Es en este contexto donde tienen cabida las categorías de “justicia transicional desde arriba” y “justicia transicional desde abajo.

La visión “desde arriba” aborda las relaciones entre política y derecho desde una mirada fundamentalmente institucional, que hace énfasis en el diseño de políticas públicas, marcos jurídicos y el rol de las élites políticas. Por su parte la perspectiva “desde abajo”, se concentra “por una parte en la participación de actores no estatales en el diseño político y la aplicación de mecanismos de justicia transicional, y por la otra, en las prácticas no formales de resolución de conflictos en espacios locales” (Gómez, 2015, pág. 152). En el contexto sonsonense estas categorías fueron útiles para reflexionar sobre las tensiones existentes frente a las visiones de la justicia en Sonsón.

Formas de justicia adoptadas a partir de una perspectiva “desde arriba”

Por un lado, las formas de justicia adoptadas por las elites del municipio han tendido a silenciar las voces y las prácticas de las víctimas, activistas y defensores de derechos humanos. Esto se concluye a partir de las entrevistas realizadas a líderes políticos y miembros de familias de importante tradición en Sonsón, quienes ven innecesario que las víctimas exijan y promuevan políticas de memoria que les permita el esclarecimiento de la verdad sobre hechos ocurridos durante el conflicto armado, para así exigir justicia ante las autoridades. Esta postura responde a una visión, según la cual, la guerra debe quedar en el pasado y los sucesos atroces que desencadenaron la vulneración a los derechos humanos deben ser enterrados y olvidados. Además, algunos de ellos, sostenían que en el municipio ya no debía hablarse de víctimas, que el único grupo en situación de vulnerabilidad eran los campesinos y que, para que estos superaran su condición de marginalidad, debían insertarse un modelo de desarrollo económico dentro de las lógicas del neoliberalismo.

Por otro lado, al solicitar información vía derecho de petición sobre los proyectos y programas que se han adelantado en el municipio durante las 2012-2015 y 2016-2019, en cuanto a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del conflicto armado. Se encontró que en la administración 2012-2015 el componente de Verdad y Justicia que comprende: medidas de construcción de memoria, protección y preservación de la memoria histórica, difusión y apropiación colectiva de la verdad y la memoria; no contó con un ningún tipo de

acción o inversión presupuestal. Por su parte, en el periodo 2016-2019, se realizaron solamente cuatro acciones de memoria que se concentraron en su mayoría en la realización de actos conmemorativos. Además, el acompañamiento que se les ofreció a las víctimas en cuanto a las medidas de justicia, verdad y reparación existentes, se limitó a tener un carácter informativo y orientador sobre los procesos que las víctimas deben seguir para exigir estos derechos.

Por otro lado, las políticas surgidas a partir de esta visión “desde arriba” de la justicia, han cumplido la función de ser un paliativo ante las dinámicas de exclusión política, social y económica por las que han atravesado las víctimas. De acuerdo con los testimonios de líderes sociales, defensores de derechos humanos y ex funcionarios del municipio, las políticas que se han realizado en materia de justicia social no han sido lo suficientemente consistentes para impactar de manera positiva la vida de la población más vulnerable del municipio. De acuerdo con Bloomfield (2015), “la justicia social (que incluye tanto la justicia distributiva como la económica), apunta a que todos los “bienes” de la sociedad (económicos, políticos y sociales) se comparten de manera equitativa” (pág. 24). Por lo tanto, si esta justicia no se consolida después de la violencia, ¿Cómo puede ser posible la construcción de escenarios de paz, donde las comunidades vulneradas permanecen en una condición de marginalidad política, económica y social?

Respecto a este punto, el testimonio de un ex funcionario de la alcaldía de Sonsón, que se ha enfocado en brindar asesorías sobre la política de víctimas en el Oriente antioqueño; permite dar luces sobre esta problemática:

“Partamos del hecho de que acá los procesos de regreso de la población desplazada a la zona rural fueron asumidos inicialmente por parte por las mismas víctimas. Por otro lado, claro, acá en el municipio se han hecho programas y proyectos para atender a la población víctima sobre todo campesina, pero muchas veces esas políticas son formuladas por un funcionario encargado, que desde la comodidad de su oficina desconoce el territorio y las necesidades de la población que lo habitan.

Sí, acá a usted le pueden decir, que, en Sonsón, se hicieron dos fases del programa *Familias en Su Tierra*⁴³, cuya población objeto fueron 192 familias del corregimiento Rioverde los Henaos y 520 familias en los corregimientos de Rioverde los Montes y los corregimientos del Magdalena Medio (La Danta, Jerusalén y San Miguel). Pero, si se analiza la implementación de esos proyectos, ahí es cuando uno entiende la desconexión tan abismal entre la realidad de esas comunidades rurales y las maneras cómo el ordenamiento local pretende organizarles la vida.

Es que la manera de ver el mundo de un campesino es muy distinta a la de uno que ha vivido en la ciudad, ahí es cuando hay un quiebre. Entonces claro, llegaban los encargados de implementar el programa que duraba alrededor de unos 24 meses, y entonces les organizaban la casa como si fuera la de ellos. Después, les enseñaban a construir una huerta casera o los motivaban a pensar en un proyecto productivo. Entonces, empezó a haber retrasos en la entrega de los insumos para los huertos. A otros no se les hizo el acompañamiento técnico suficiente para los proyectos productivos. A otros, se les entregó dinero en vez de materiales para las huertas caseras y destinaron la plata en otras necesidades. Y bueno, al final no se vieron los beneficios de estabilización socioeconómica para los que se creó el programa” (Entrevistado 7, 2019).

De acuerdo con lo anterior, estas políticas pensadas “desde arriba”, han ignorado el hecho de que la construcción de justicia en el territorio está atravesada por lógicas complejas que no puede reducirse a una dimensión institucional, ni al diseño de un mecanismo en particular. En tanto, estos son procesos que requieren de la participación de las víctimas, defensores de derechos humanos, movimientos sociales y de otros actores no institucionales; para pensarse

⁴³ El programa *Familias En Su Tierra*, hace parte de la Política Pública de Retornos y Reubicaciones iniciada por el Gobierno nacional de Juan Manuel Santos con la Ley 1448 de 2011. Es un programa de corta duración - 24 meses- planeado como una estrategia de estabilización socioeconómica para las familias reubicadas o retornadas. La focalización está a cargo de la Unidad para la Reparación Integral a las Víctimas, siendo esta la encargada de seleccionar a los hogares dependiendo de su nivel de vulnerabilidad. Una vez inscritos los hogares en el programa, se debe contratar una entidad acompañante que se encargue articular los componentes y ejecutarlos. Estos componentes son: incentivo económico para el retorno, seguridad alimentaria, carencias básicas habitacionales, promoción de idea productiva.

múltiples herramientas y dinámicas sociales que contribuyan a la elaboración de sentidos democráticos en materia de justicia.

Formas de justicia adoptadas a partir de una perspectiva “desde abajo”

Para autores como David Bloomfield (2015), una sociedad justa no depende solamente de los procesos judiciales. “Hay otras definiciones de justicia, que no contradicen la retributiva, sino que la complementan y son esenciales para la reconciliación y la construcción de paz” (pág. 27), precisamente esas otras formas de hacer justicia fue las que se lograron rastrear en el municipio de Sonsón, a partir de los repertorios de resistencia, memoria y sobrevivencia de las víctimas del conflicto armado.

Los embates del conflicto armado y del desplazamiento forzado llevaron a que desde 1998 la población sonsoneña se reunieran en el casco urbano del municipio para construir iniciativas de participación y resistencia frente a la violencia que se vivía en sus territorios. Entre estas iniciativas surgen la “Asamblea Comunitaria Unidos por el Desarrollo y la Democracia”, los proyectos “De la Casa a la Plaza”, “Jóvenes por la Paz” y la formación de “Promotoras de Vida y Salud Mental –PROVISAME. Posteriormente gracias al trabajo conjunto de la población sonsoneña, es posible la conformación en el año 2007 de la Asociación de Víctimas por la Paz y la Esperanza de Sonsón, la cual se convertirá en un “escenario para reclamación de derechos, la formación y la visibilización de las víctimas del conflicto armado, dando continuidad a procesos locales y regionales de construcción de paz” (González, 2015, pág. 13).

Uno de los grandes logros de esta asociación será la posibilidad de abrir espacios de participación, expresión y resistencia a las víctimas del conflicto como lo fue en el año 2009 la apertura de *El Costurero Tejedoras por la Memoria de Sonsón*. El cual surge de la mano de la Universidad de Antioquia, por medio del apoyo del Banco Universitario de Programas y Proyectos de Extensión –BUPPE– con el acompañamiento de la investigadora del Instituto de Estudios Regionales, Isabel González Arango. Para González, a través del costurero se han logrado “explorar diversos sentidos, temáticas y expresiones artísticas (muñecos, colchas de retazos), con el fin de narrar los procesos de resistencia, reconciliación, reparación y algunos de los hechos violentos ocurridos en la zona en el marco del conflicto armado” (2015,

pág. 16). Además, a través de los testimonios de algunas de sus integrantes pude comprender que este espacio no solo se convirtió en la posibilidad para sanar sino en una forma de resistir, buscar justicia y apelar por la participación política en espacios de toma de decisiones.

“Nosotras éramos mujeres del campo. Usted sabe, criábamos a nuestros hijos, sembrábamos, lidiábamos a las bestias, estábamos pendientes del marido. Pero llegó la guerra y nos tuvimos que venir para acá (el caso urbano) y pasamos tiempos muy duros, porque la mayoría a causa de la guerra nos convertimos en madres cabeza de familia y ya hay unas muy mayores. Entonces se imaginará lo difícil que fue, hasta empezamos con el Costurero, donde nos empoderamos. Ahí es que nosotras decimos que empezamos a sanar, porque sacamos los que teníamos dentro y nos apoyábamos entre todas.

Por eso, si nosotras fuimos víctimas eso se tiene que reconocer, pero no por pesar, sino porque es como le dijera yo, es lo justo. Si a usted alguien le hace algo, le tiene que responder. Pero yo digo que también somos sobrevivientes, somos berracas; levantamos a nuestros hijos, pero también estamos contando lo que pasó, lo que nos dolió y lo que queremos. Hay gente que piensa que nosotros queremos que nos den todo regalado, pero así no es la cosa. Queremos que nos colaboren para tener una vida digna, pero nosotros queremos trabajar. Queremos que nos oigan, por qué quien más que nosotras para saber lo que pasó y lo que necesitamos. Nosotros lo que buscamos es la verdad, la dignidad, que podamos vivir mejor que en el campo, sin pasar necesidades”. (Entrevistado 18, 2020)



Figura 2 y 3. Colchas de retazos y bordados elaborados por las integrantes del *Costurero Tejedoras por la Memoria de Sonsón*, donde plasman las dimensiones del daño que ocasionó la guerra, así como el justo y urgente reconocimiento de sus historias, memorias y familiares fallecidos.

Fuente: Oriente es periodismo de opinión, 2021.

Por otro lado, para González (2015), estas creaciones son documentos políticos que, “entrelazadas y puestas en lo público, aportan a la memoria histórica y la reintegración comunitaria desde un enfoque diferencial, resignificando la situación de ser víctimas sobrevivientes” (pág. 15). Estas iniciativas que se gestan en el costurero, no solo permiten dar un nuevo sentido al rótulo de víctima en materia de participación política y modificar la identificación de quien es víctima con el calificativo de desvalido por el de sobreviviente, sino que además posibilitan entender a la víctima como sujeto de derecho, como quien está en capacidad de reclamar su derechos y de formar parte activa de los procesos de reparación, paz y reintegración desde sus saberes y su concepción del mundo.

Por otro lado, en el 2016 surgió el Salón de la Memoria en Sonsón como una iniciativa del Costurero de Tejedoras por la Memoria y la Dirección Técnica de Cultura y Patrimonio de Sonsón con el acompañamiento de la Universidad de Antioquia y el Centro Nacional de Memoria Histórica. Si bien este espacio se ha convertido para las víctimas en un lugar importante de memoria, de identidad, de justicia, de sentido y de referencia de lo sucedido

en el marco de la guerra; la municipalidad y demás entidades gubernamentales no han reconocido y apoyado el museo como un lugar de memoria y reparación. Es así como la manutención de este lugar ha corrido por cuenta de las víctimas y de ciudadanos que están interesados en que los jóvenes conozcan y reflexionen sobre lo que aconteció en su municipio. Por eso, González (2015) sugiere que este tipo de espacios “deben ser reconocidos a través de una política clara que les otorgue el valor que realmente tienen como espacios pedagógicos que promueven reflexiones sobre lo que somos como sociedad” (pág. 17).



Salón de la memoria Sonsón

Fuente: Hacemos memoria, 2018.

A través de las acciones colectivas de resistencia y memoria llevadas a cabo por la población sonsoneña podría plantearse que su labor en la construcción de paz y durante el posconflicto, no se limita a la de un testigo que busca narrar el paso de la guerra por su vida y su territorio. Sino que es un quehacer “desde abajo”, “que a través de metodologías participativas encaminadas al diálogo de saberes y a la coproducción de conocimiento reconstruyen el pasado con acciones en el presente y enseñan formas de conocimiento, historias diferentes a la oficial, hegemónica o institucional” (González, 2015, pág. 11).

Por otro lado, esta comunidad construye sus propios significados y formas de justicia, las cuales no se agotan en la justicia penal del Estado o en sus reparaciones administrativas. Sino que, como lo plantea Mika (2009), esta comunidad parte de una justicia transicional “*desde abajo*, como la inclusión de la perspectiva de las víctimas sobre cómo *hacer justicia*, para visibilizar propuestas que interpelen al Estado y constructivamente aporten a la paz desde prácticas cotidianas que potencien las capacidades de las comunidades locales” (pág. 230). Por lo tanto, esos actores sociales a través de sus acciones de resistencia y estrategias de sobrevivencia se configuran como sujetos de derecho que demandan y aportan en la reconstrucción de sus vidas y comunidades.

Visiones de la paz en el municipio de Sonsón: entre la paz neoliberal y la paz democrática

Disputas en el territorio del Oriente Antioqueño tras el proceso de pacificación armada

Tras el proceso de pacificación armada que se dio en el Oriente antioqueño y en el municipio de Sonsón, se generó un ambiente de relativa tranquilidad y en el 2008 estos territorios se declararon como militarmente consolidados (Corporación Jurídica Libertad, 2018). En ese contexto, las familias desplazadas comenzaron a regresar a sus tierras, en la mayoría de los casos, bajo su propio esfuerzo y sin contar con un acompañamiento institucional. De manera paralela a estos procesos de retorno, se reactivaron los proyectos minero-energéticos que, en ciertos casos, ya se venían gestando desde los años 80, por medio de estudios o licencias, pero que se vieron interrumpidos por la confrontación armada. Esto demuestra cómo “los vencedores de la guerra implementan su modelo económico, el proyecto minero-energético en el Oriente antioqueño” (Restrepo, 2015, p.24).

Ante un tejido social resquebrajado por las huellas de la guerra y el exterminio de gran parte de los líderes sociales en el contexto de la confrontación armada, este modelo económico enclavado en una nueva oleada de imposición de megaproyectos tuvo el camino libre para ingresar a los territorios del Oriente antioqueño y del municipio de Sonsón. En este sentido, los intereses de la población que estaba retornando, queriendo levantar sus fincas principalmente de producción agrícola, chocaron nuevamente con las intenciones de las

empresas de desarrollar proyectos minero-energéticos en la región (Movete, 2018 pág. 65). Por lo tanto, se gesta un conflicto que opone a diversos actores económicos y políticos por el control de la región, el cual se enmarca en la lógica de un modelo de gobernanza neoliberal, “que despliega una serie de disputas entre diferentes actores que se caracterizan por tener relaciones asimétricas y diferentes concepciones del territorio de acuerdo con su forma de apropiación/dominación” (Movete, 2018 pág. 110).

La paz en jaque: entre los proyectos de desarrollo y la resistencia de las comunidades

Para Johan Galtung (2003), la paz debe ser más que la mera ausencia de un conflicto violento (entendida como paz negativa); los Estados (o cualquier grupo dentro de un conflicto) deben buscar relaciones de colaboración y apoyo mutuo para lograr una paz positiva. Por lo que, en el momento del cese al fuego el trabajo para construir la paz no está sino a punto de comenzar, para lograr así una paz que dure más allá del alto al fuego. Por lo que, “la construcción de paz debería coincidir con una situación de justicia en la que las relaciones intergrupales sean de tipo cooperativo, y se encuentran vigentes en su plenitud los derechos humanos” (Harto de Vera, 2016, pág. 129). Sin embargo, la modernización neoliberal de estas últimas décadas ha traído consigo disputas por el territorio que, en el municipio de Sonsón, se han traducido en visiones contrapuestas de la paz.

Está en disputa la visión de las maneras propias de habitar el territorio. ¿Nosotros qué nos disputamos aquí? La manera propia de entender cómo habitamos nosotros este territorio, cómo lo disfrutamos. ¿Que nosotros defendemos el agua por qué? Porque sin el río no pudiéramos vivir, porque el río es el medio vital. Entonces estamos disputando la manera en cómo nosotros habitamos el territorio porque nos van a imponer otra manera distinta de habitarlo (Movete, 2018, pág. 125)

Estas disputas por la forma de entender y ordenar el territorio en el municipio de Sonsón se han concentrado principalmente en tres campos: proyectos hidroeléctricos y mineros.

Proyectos hidroeléctricos

Como se puso de manifiesto en un apartado anterior, los proyectos hidroeléctricos han sido una de las formas de despojo que más ha afectado el territorio del Oriente antioqueño, ya que

este territorio se convirtió en un nodo estratégico a nivel energético a escala nacional. En lo que respecta al municipio de Sonsón, ya en la década de los sesenta se convirtió en uno de los territorios destinados para la expansión de este tipo de proyectos, así para este período se construyeron las centrales hidroeléctricas Sonsón I y Sonsón II. Tras el proceso de pacificación armada en estos territorios, este municipio vuelve a ser objeto de interés para el desarrollo de estos proyectos al contar con una importante riqueza hídrica, proveniente del páramo. Así, en el año 2019 se construye la pequeña central hidroeléctrica Aures Bajo y se empiezan a proyectar un gran número de pequeñas y medianas centrales en el territorio: Hidroarma, Sirgua I, Sirgua II, Paloma I y II, Paloma III y IV, Aures Arriba, Guayacanes (Rio Samaná Norte). La proliferación de estos proyectos en el territorio y los impactos que pueden generar para la vida de las comunidades y el medio ambiente ha desatado una serie de disputas entre empresas privadas, entidades estatales y pobladores de la zona.

De acuerdo con el trabajo de campo, estas centrales hidroeléctricas han generado conflictos socioambientales en el municipio que han propiciado nuevos desplazamientos de población, causados esta vez no por el conflicto armado, sino por las consecuencias ambientales sobre el territorio. Además, se están generando nuevas dinámicas que pueden devenir en procesos de venta forzada, ante la presión que existe por adueñarse de las tierras para realizar estos proyectos energéticos; lo que ha conllevado a una revictimización de las comunidades. Lo cual se puede entrever en el testimonio de un líder social de la región:

“Para la de Aures bajo tuvieron que construir una vía nueva y no se hicieron los estudios necesarios, entonces se formaron unos barrancos muy grandes que se han ido deslizado. Esos deslizamientos arrasaron con los cultivos de café y plátanos de la zona. Otros cultivos que se habían salvado se deterioraron por la cantidad de polvo que había en la zona. Claro, no solo se vinieron los cultivos, eso también se llevó casas y habitaciones enteras de la gente que vivía ahí, se tuvieron que ir para otra parte.

Con la de Hidroarma, que está en proyecto también hay muchos problemas, porque lo que quieren hacer es obligar a que los campesinos a que vendan para que puedan construir la central. Pero, los avalúos de los predios son un engaño. Imagínese que les quieren pagar 200 pesos por el metro cuadrado”. (Entrevistado 13, 2019)

Por otro lado, han surgido importantes disputas con Cornare en medio de los procesos de proyección y construcción de estas pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas. La Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare, CORNARE, es una de las Corporaciones Autónomas Regionales que se crean mediante la Ley 60 de 1983; la cual se encarga de administrar dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables. Las disputas que las comunidades han tenido con esta entidad se deben a la manera en la que se han llevado a cabo los procesos de licenciamiento ambiental, en donde se han privilegiado los intereses de la empresa privada sobre los principios constitucionales básicos como el derecho a la vida y al medio ambiente sano, que tienen los sonsoneños.

Es en este contexto de disputas territoriales, donde el 17 de septiembre de 2020, se crea la mesa la Mesa de Diálogo Socioambiental, la cual es un espacio que busca propiciar la participación de las comunidades en la planificación de las políticas medioambientales que impactan el territorio. Como lo menciona uno de los líderes ambientales que empezó a formar parte de esta mesa, lo que las comunidades quieren es: “una construcción democrática del territorio, donde se tengan en cuentas las necesidades de los campesinos y donde no se llegue a la imposición de unos proyectos y modos de vida ajenos a sus costumbres” (Entrevistado 18, 2020).

Proyectos mineros

A partir del 2003 con las operaciones militares en el Oriente Antioqueño, la desmovilización de las Autodefensas a cargo de Ramón Isaza para el 2006 y la salida del bloque 9 y el 47 de las FARC- EP del Oriente Antioqueño, los hechos violentos asociados al conflicto armado tienden a desaparecer. Sin embargo, las dinámicas respecto al despojo y el abandono en el Magdalena Medio sonsoneño, no terminaron. A partir del supuesto retiro de grupos armados de esta zona del municipio, continuaría la consolidación de proyectos extractivos concentrados en el sector minero, que han propendido por traer prosperidad a la región.

De acuerdo con a Algranati, Seoane y Taddei (2013), el extractivismo remite a las actividades que utilizan o explotan bienes que son considerados no renovables como por ejemplo el petróleo, el gas o los minerales. Además, actualmente este concepto se ha ampliado bajo la fase neoliberal que altera el carácter no renovable de los bienes naturales afectados donde,

“por razones políticas y tecnoproductivas, la tasa de extracción se vuelve mucho más alta que la tasa de renovación del recurso” (Algranati, Seoane y Taddei, 2013, pág. 25)⁴⁴.

Por otro lado, este modelo extractivo exportador, no solo supone una lógica de saqueo, contaminación y dependencia; sino que es un proceso que implica el uso de la violencia, el fraude y la corrupción. Por lo que el extractivismo remite también:

“al proceso social de apropiación privada por parte de grandes corporaciones empresarias de bienes naturales que eran de propiedad común o privada, sea individual o pequeña, que servían a la reproducción social de la vida local o constituían parte del hábitat territorial”⁴⁵ (Algranati, Seoane y Taddei, 2013, pág. 16).

Por lo tanto, el modelo extractivo exportador está enclavado en un proceso de acumulación de tierras y de despojo, que traen como consecuencia la transformación de las relaciones tierra-trabajo. Autores como el geógrafo inglés David Harvey (2006) denominan este proceso como “acumulación por desposesión” así como otros autores latinoamericanos la refieren como “acumulación por despojo”.

De acuerdo con, el trabajo las entrevistas realizadas a habitantes de la zona y consultando a expertos, en el Magdalena Medio sonsonense, se llevó a cabo un proceso de acumulación por desposesión para llevar a cabo la expansión de la extracción minera y de ganadería en la región. Habitantes de la zona, han denunciado que miembros de grupos paramilitares tras el proceso de desmovilización, presionaron a los poseedores, ocupantes, propietarios o tenedores de los predios para que llevarán a cabo la venta de sus lotes, ya que empresas mineras estaban necesitando terrenos en Jerusalén y La Danta para expandir el área de explotación.

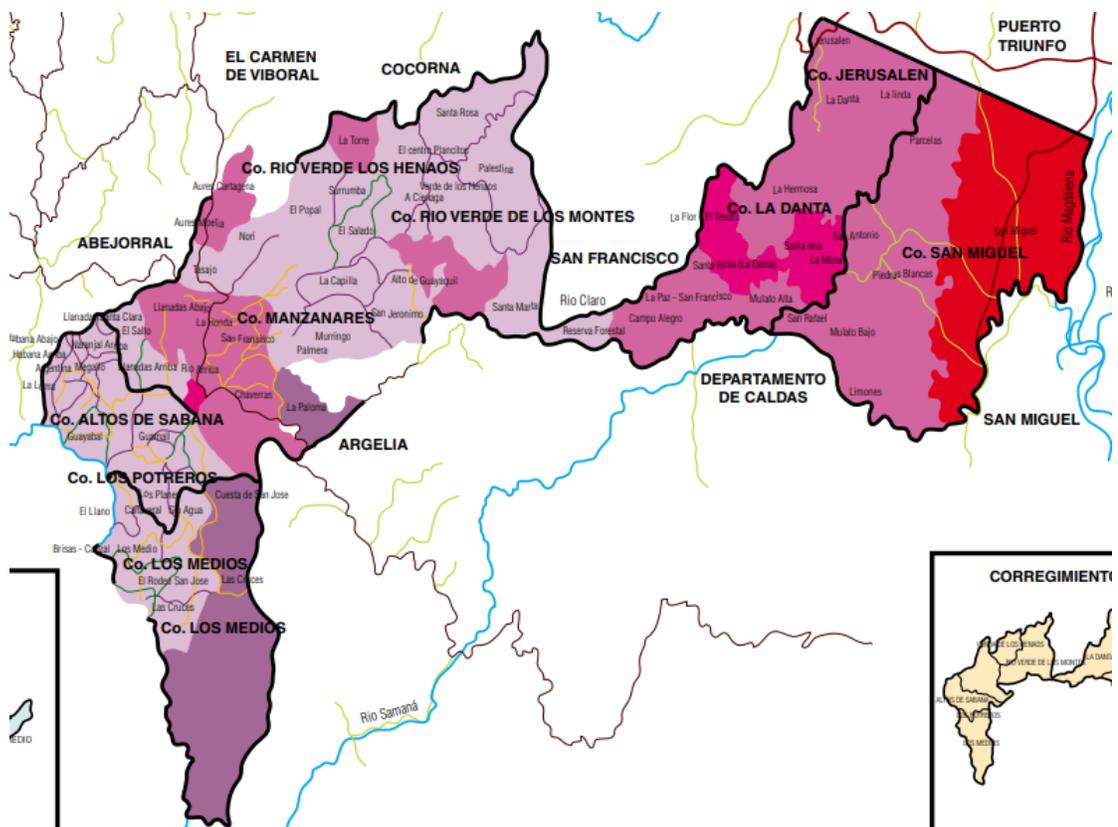
De acuerdo con, una investigación realizada por El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y el Instituto Popular de Capacitación en el 2011:

⁴⁴ “Por tanto, el “modelo extractivo exportador”– reúne un conjunto diverso de actividades –desde la soja transgénica a la minería a cielo abierto, desde los enclaves turísticos de lujo a las pasteras y las plantaciones industriales de árboles– que se caracteriza por la misma lógica de despojo y devastación ambiental” (Algranati, Seoane y Taddei, 2013).

⁴⁵ El carácter social de esta extracción requiere así niveles crecientes de violencia.

“La propiedad en el municipio de Sonsón registrada legalmente ante la Oficina de Instrumentos Públicos revela que la mayor concentración de riqueza se encuentra en la zona del Magdalena Medio. El mayor reporte de tierras con la más alta valorización y el mayor número de títulos de propiedad se presenta en el corregimiento San Miguel, seguido del corregimiento La Danta y el corregimiento Los Medios, y finalmente el corregimiento Alto de Sabanas” (pág. 313)

Concentración de predios en calidad de propiedad privada en el municipio de Sonsón



Fuente: Análisis de información catastral realizado por el Instituto Popular de Capacitación, 2011.

Así, tras la desmovilización y con la llegada de Argos a la zona del Magdalena medio sonsoneño para llevar a cabo la explotación de piedra caliza y mármol; estos actores armados se convierten en grandes aliados para llevar a cabo el despojo de predios que son de interés para la explotación minera, generando miedo y zozobra en la población dando paso a que estas situaciones de violencia queden en el olvido y no sean objeto de denuncia pública. Esta dinámica se lleva a cabo a partir de la vía jurídica, trasladando derechos de propiedad de

campesinos a empresarios, y por la vía de hecho, expulsando población contratando mercenarios, en este caso paramilitares. Así, la población que es propietaria de los predios los vende de manera forzosa a los empresarios interesados en la explotación minera con escritura y matrícula; mientras que quienes están en aquellos predios en condición de ocupación de baldíos venden al precio que la empresa les exige ante las amenazas por parte de esta de ser denunciados al estar en un predio sin formalización que es propiedad estatal.

Por otro lado, en el contexto del modelo neoliberal actual y en el proceso de acumulación por desposesión, la relación entre la naturaleza y el trabajador se modifica, en tanto se rompe el vínculo entre ambos cuando “en este proceso se separa súbita y violentamente a grandes masas humanas de sus medios de subsistencia y de producción para constituir a los trabajadores libres” (Marx, 2004, pág. 895). Esta situación se presenta claramente en el territorio estudiado, cuando los campesinos son despojados por vía legal y/o violenta de sus predios o se ven conminados a abandonar su predio; y las garantías de vivienda, bienestar, subsistencia y dignidad que les permitía sus derechos con la tierra se ven rotas y desarticuladas. Ante esta situación, muchos de ellos se ven empujados a convertirse en trabajadores asalariados de los proyectos mineros o ganaderos que bajo el sistema de producción imperante los dejó sin derecho al territorio, al uso público del suelo y a las libertades de acceso a la propiedad privada.

Reparación en el municipio de Sonsón: ¿una reparación transformadora?

En 2011, el Estado colombiano expidió la Ley 1448, más conocida como Ley de Víctimas, dentro de la cual, en un marco de justicia transicional, se establecieron medidas para la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. La reparación integral comprende 5 medidas, las cuales son implementadas por las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas – SNARIV. Estas medidas son: medidas de rehabilitación, medidas de satisfacción, garantías de no repetición, restitución, medidas de indemnización. Respecto a esta perspectiva de la reparación integral, Uprimny y Safin (2009) plantean que estas medidas tienen como objetivo “transformar las relaciones de subordinación y exclusión social que se encuentran en el origen del conflicto que busca ser superado y que en todo caso aparecen inicuas desde una

perspectiva de justicia distributiva” (p. 34). Por lo tanto, en el municipio de Sonsón intenté rastrear si las medidas de reparación lograron transformar las condiciones de subordinación y exclusión social y política de las víctimas del conflicto armado.

En cuanto a la restitución de tierras, se encontró que, particularmente para el municipio de Sonsón este proceso ha sido bastante lento. En primer lugar, porque para que pueda llevarse a cabo la restitución es necesario que se realicen procesos de desminado que garanticen condiciones de seguridad en el territorio. En Sonsón, el proceso de desminado ha sido muy problemático, en tanto no fue uno de los municipios priorizados para estos procedimientos en el Oriente antioqueño. El Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario en Ejército Nacional de Colombia, enfocó sus labores en el desminado de: San Carlos, San Luis, Granada, una parte de San Francisco, San Rafael. Por lo que, los pobladores de Sonsón tuvieron que esperar a que Halo Trust, una organización de carácter civil realizara estas labores de desminado en sus territorios⁴⁶. Por otro lado, un ex funcionario de la Unidad de Restitución de Tierras en Antioquia me comentó que: “en Sonsón existe una falta enorme de capacidad técnica y presupuestal para llevar a cabo los procesos de microfocalización en el territorio” (Entrevistado 11, 2020). La microfocalización es el proceso mediante el cual, se definen las áreas geográficas en las cuales se debe hacer el estudio de las solicitudes de restitución recibidas (Decreto 1071 de 2015, art. 2.15.1.2.3.). Sin estas decisiones, los equipos de terreno no pueden estudiar las solicitudes. Por lo tanto, esta situación ha dificultado que campesinos del territorio, tengan la capacidad de reconstruir un proyecto de vida en la tierra que antes habitaban.

⁴⁶ “Desde 2013, HALO ha estado realizando operaciones de desminado civil humanitario que incluyen despeje de minas antipersonal en Colombia, haciendo que la tierra sea segura en Antioquia, Meta, Tolima, Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Putumayo y pronto comenzará a trabajar en Norte de Santander. Hemos eliminado las minas antipersonales de los cultivos de café, fincas, veredas y resguardos indígenas, entre otros” (Halo Trust, 2018). Recuperado de: <https://www.halotrust.org/where-we-work/latin-america/colombia-espanol/>



Río Verde de los Montes

Fuente: Periódico el páramo, 2019.

Por otro lado, se encontró que las acciones de reparación se han limitado a medidas básicas de superación de la pobreza, marcadas por una mínima redistribución bajo la intencionalidad de pacificar los descontentos locales frente a la desigualdad. Esto se evidencia en medidas de reparación cómo: pozos sépticos, estufas eficientes, medidas de asistencia humanitaria inmediata. Además, de la construcción de carreteras que han intentado disminuir el descontento de algunos pobladores que habitan en zonas bastante alejadas del caso urbano y que, por lo tanto, tienen grandes dificultades de conexión y acceso a otros puntos del municipio y a otros poblados centros poblados aledaños. Por otro lado, los montos de la reparación administrativa han sido poco significativos para impactar económicamente la vida de estas comunidades ⁴⁷y en ocasiones, recibir este tipo de recursos les ha resultado hasta problemático, como lo menciona uno de los campesinos de Río Verde de los Montes:

“Vea, hija muchas veces uno prefería no pegarse ese viaje hasta Medellín, porque salir de acá de Río Verde siempre es difícil. Además, uno mismo se tiene que pagar

⁴⁷ Se han entregado entre dos y tres subsidios a la población desplazada. Los primeros rondan el millón de pesos, los demás entre 150.000 y 50.000 pesos.

la ida hasta allá. Y sinceramente ir hasta por allá por 50.000 o 70.000 pesos, no vale la pena” (Entrevistado 20, 2019).



Río Verde de los Montes

Fuente: Oriéntese, 2021

Además, las medidas de reparación de la población campesina se han concentrado en impulsar la realización de proyectos productivos, sobre todo el proyecto productivo de aguacate Hass de tipo exportación⁴⁸. Sin embargo, estos proyectos en realidad no tienen en cuenta las particularidades del sujeto campesino a la hora de repararlo. Se deja de lado su relación con el territorio y las condiciones de desigualdad económica, política y económica que han atravesado históricamente. Así, que dichas medidas son solo paliativos para su situación de marginalidad y exclusión, que terminan por incluirlos en unas lógicas de mercado que siguen perpetuando condiciones de injusticia y pobreza. Así, lo relata un poblador de Río Verde de los Montes:

⁴⁸ “En el Municipio de Sonsón la variedad más sembrada en aguacate es el tipo Hass, porque es un producto exportable que genera rentabilidad en el tiempo, se cuenta con un estimado de 3800 hectáreas en todo el municipio, no contamos con la información puntual sobre áreas y proporciones en cada corregimiento y/o vereda. El cultivo de aguacate en el municipio de Sonsón inició en los años de 1996 y fue creciendo de forma lenta hasta alrededor del año 2014 donde llegaron las empresas a adquirir predios para la siembra de grandes extensiones de aguacate, a partir de ese año y hasta la fecha las áreas sembradas en aguacate han crecido en mayor proporción dado a que el mercado de este producto ha crecido significativamente” (Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente de Sonsón, 2021, pág. 4).

“¿Qué me gano yo con que venga un técnico hasta acá a entregarme unas semillas o unos materiales? Si cuando uno va a vender lo que saca de la tierra se vende bien barato, pero los insumos para mantener el cultivo si son bien caros. Además, eso no viene de ahora, eso ha pasado desde siempre. Por eso es que el campo, se está quedando tan solo, porque no hay políticas integrales para nosotros” (Entrevistado 12, 2019).

Por lo tanto, estas medidas de reparación no han transformado las condiciones de marginalidad política, social y económica que han experimentado estas comunidades, incluso antes de la situación violenta en el municipio, es decir, no han podido gozar de derechos básicos fundamentales precisamente “por la ausencia o debilidad de lo que Hannah Arendt llama espacios de aparición” (Ruiz y Castaño, 2017, pág. 32). Estos espacios de aparición se refieren a estos lugares donde las comunidades pueden interpelar al Estado. Sin embargo, para estas comunidades el Estado ha sido percibido como algo ajeno o externo, que aparece cuando solicita votos o en forma de fuerza de seguridad (el ejército en las operaciones militares contra las guerrillas). Por lo tanto, esos espacios de interacción entre estas comunidades y funcionarios públicos, políticos, instituciones estatales han sido marginales, en tanto se ha dificultado que estas comunidades puedan poner sobre la mesa las particularidades sobre su territorio y sus perspectivas sobre cuáles serían los mecanismos más efectivos para sentirse reparadas.

Conclusiones

A través del trabajo realizado en el municipio de Sonsón, se concluye que es un territorio donde hay disputas por la memoria y el territorio. Respecto a la memoria, existen tensiones y luchas por los sentidos del pasado, que se reflejan en las políticas de verdad y memoria que se han llevado a cabo en el municipio, las cuales han propendido por oscurecer y hasta silenciar aquellos hechos del conflicto armado que aún no han sido esclarecidos y que podrían implicar a la fuerza pública en la violación de derechos humanos. Estas políticas también han dejado de lado el deber de memoria que las instituciones del Estado tienen, al no generar escenarios de debate y discusión no solo sobre lo acaecido durante el conflicto armado, sino

también respecto a las prerrogativas de las víctimas en cuánto verdad, memoria, justicia y reconocimiento.

Por su parte, las víctimas han realizado repertorios de resistencia y acción colectiva que les han permitido rebatir la versión oficial o hegemónica de los hechos acaecidos durante la guerra. Por lo que, piezas como las colchas de retazos, las quitapesares y demás tejidos, se han convertido en píldoras contra el olvido, que han buscado narrar lo acaecido durante la guerra con el fin de interpelar a diferentes sectores y seguir exigiendo justicia y reconocimiento. Pues, como plantea Suarez (2021):

la memoria ha permitido a las víctimas del conflicto armado poner en la esfera pública su sufrimiento, sus daños y su resistencia para interpelar a los victimarios, a la sociedad y al Estado, rebelándose contra una guerra con la que nunca estuvieron conformes, por más que su larga continuidad la haya instalado duraderamente en su cotidianidad (pág 29).

Por lo tanto, las iniciativas que se han realizado en el municipio de Sonsón, no solo permiten dar un nuevo sentido al rótulo de víctima en materia de participación política y modificar la identificación de quien es víctima con el calificativo de desvalido por el de sobreviviente, sino que además permiten entender a la víctima como sujeto de derecho, como quien está en capacidad de reclamar su derechos y de formar parte activa de los procesos de reparación, paz y reintegración desde sus saberes y su concepción del mundo. Por lo que, estos espacios, iniciativas y repertorios deben ser reconocidos y apoyados a través de políticas y proyectos que asuman estos escenarios cómo lugares de encuentro, debate y reflexión necesarios para pensarnos que fue lo que nos pasó, por qué nos pasó y cuál es el camino que debemos seguir para sanar, reparar, remendar, tejer y construir.

Por otro lado, la riqueza natural y la posición estratégica del municipio, lo han convertido en una zona en disputa en la que se han generado dinámicas de despojo y abandono durante el periodo de conflictividad armado, que han devenido en procesos de acumulación de tierras y en cambios del uso del suelo, que siguen impactando la configuración territorial del

municipio. Pues, si bien la confrontación bélica entre los actores armados ha terminado, existen presiones del modelo económico extractivista por imponer unas formas de planear, habitar y entender el territorio que se contraponen a los modos de vida campesinos, sus tradiciones, su perspectiva sobre la conservación y la importancia de los recursos naturales para la vida. Por lo que, sino se propician espacios de concertación, debate, participación y procesos de gobernanza con las comunidades sobre la planeación territorial, estas dinámicas pueden generar nuevos desequilibrios, niveles de destrucción social y medioambiental; que pongan en jaque las pretensiones de construcción de paz en Sonsón.

Por otro lado, la reparación integral en el municipio de Sonsón es una tarea inacaba, la cual debe dejar de ser un derecho formalmente estipulado en la ley para convertirse en una realidad para las víctimas del municipio. Se concluye que, se han realizado políticas y proyectos en condiciones de desconexión y desarticulación de las instituciones del Estado, los cuales se han caracterizado por ser poco claros, rigurosos y realistas al ignorar las condiciones culturales, económicas y sociales de la población a reparar. Además, el engranaje burocrático colombiano ha sido otra de las barreras que ha impedido que las víctimas accedan a las diferentes medidas de reparación, ya que los trámites, los procesos y las mismas dinámicas jurídicas que las víctimas desconocen; han generado que los tiempos de reconocimiento, acompañamiento y atención de esta población haya tardado entre 3 y 7 años.

Por otra parte, se requiere ampliar el marco de comprensión de las medidas de reparación, en tanto, es esencial reconocer la discusión sobre el territorio desde diferentes sectores para reconocer problemáticas y situaciones de carácter más estructural que han cimentado las bases de la conflictividad social y política. Por lo que, como plantean Ruiz y Castaño (2017):

Se hace necesario que el entramado institucional de atención a la población víctima se concentre no sólo en atender la inmediatez de la crisis humanitaria, sino en promover que esos espacios de aparición sean tan fuertes que incluso las víctimas

puedan dejar atrás su estatus de tal sin temer volver a ser ciudadanos excluidos y marginales (pág. 44).

Por lo que, para estas comunidades la reparación debe ser asumida como una condición de posibilidad para mejorar sus condiciones materiales de existencia, donde estén en capacidad de contar con un sueldo digno, unas óptimas condiciones en el territorio para mantener sus cultivos y un comercio justo para comercializar sus productos. Además, asocian la reparación con la posibilidad de decidir sobre el ordenamiento territorial, ya que requieren interpelar a las diferentes instituciones estatales y ser reconocidos como sujetos de derecho, con el fin de participar en la planeación y configuración de los lugares que habitan, y evitar que instancias institucionales y privadas decidan sobre sus modos de vida y apropiación de la tierra. Además, plantean que los procesos de reparación deben estar atravesados por garantías de no repetición, pues no desean que la guerra vuelva a pisar su territorio; no quieren volver a experimentar el desarraigo, la muerte y la desolación; ellos solo quieren “vivir en paz en su tierrita y ver pelear a los cultivos y a la familia”. Por lo tanto, las políticas de reparación en estos lugares deben realizarse con miras a recuperar la vida cotidiana de estas personas, generar unas condiciones materiales que permitan una vida justa y digna, preservar la tradición y los modos de vida campesinos; permitir la interlocución, participación e interpelación de estas comunidades a los planes y proyectos que se diseñan e implementan respecto al ordenamiento territorial.

Anexos

Anexo 1:

Tabla 7. Desplazamiento forzado por personas.

Desplazamiento forzado por personas						
Año	Granada	San Carlos	Abejorral	Argelia	Sonsón	Nariño
2002	8.487	7.240	2.101	6.670	3.138	1.274
2003	2.821	3.684	1.320	1.691	3.974	1.332
2004	2.135	2.807	958	1.611	2.027	1.390
2005	1.118	1.696	589	3.922	2.129	2.147
2006	646	948	473	3.305	1.587	4.058
2007	383	536	382	605	1.501	1.558
2008	333	383	328	358	903	557
2009	82	125	81	63	411	212
2010	14	83	92	55	234	105
2011	26	68	68	46	172	125
2012	41	64	49	78	156	93
2013	17	35	22	63	121	176
2014	33	42	36	37	98	122
2015	14	18	3	29	66	53

Fuente: Elaboración de Cristian Camilo Gallego Jaramillo a partir del Registro Único de Víctimas.

Bibliografía

- Insuasty, A (2017). *Elementos para una genealogía del paramilitarismo en Colombia : historia y contexto de la ruptura y continuidad del fenómeno*. Medellín: Kavilando.
- Antiqueño, O. d. (2008). *Serie: Crónicas Corregimientos del Oriente Antioqueño*. Rionegro.
- Aparicio, J. R. (2005). Intervenciones etnográficas a propósito del sujeto desplazado: estrategias para (des)movilizar una política de la representación. *Revista Colombiana de Antropología*, 135-169.
- Aparicio, J. R. (2017). Hacer un desplazado: dimensiones institucionales y subjetivas del programa de atención a víctimas del conflicto armado en Colombia. *Revista de Antropología Social*.
- Arendt, H. (2005). *La Condición Humana*. Barcelona: Paidós .
- Arias, W. (2018). *Así se roban la tierra en Colombia*.
- Butler, J. (2017). *Cuerpos aliados y lucha política. Hacia una teoría performativa de la asamblea*. Barcelona : Espasa .
- Blair, E. (2011). Micro políticas de la(s) memoria(s): el sentido político de la dignidad. *Desde la Región*.

- Bloomfield, D. (2015). *Reconciliación : perspectivas y aportes conceptuales para su comprensión*. Bogotá: Cinep.
- Boltanski, L. (1990). *El amor y la justicia como competencias: Tres ensayos de sociología de la*. Paris: AMORRORTU.
- Bourdieu, P. (1996). *Economía de los intercambios lingüísticos*. Sao Pablo : Edusp.
- Cárdenas, J. (2015). ley de restitución de tierras en Colombia de espaldas a los opositores de buena fe. *Revista Latinoamericana de Derechos Humanos* 26 139 Volumen 26 (2), II Semestre 2015 (EISSN: 2215-4221).
- Castro, J. C. (2019). *Fin de semana negro*. Medellín: Silaba.
- Catela, L. d. (2000). De eso no se habla. Cuestiones metodológicas sobre los límites y el silencio en entrevistas a familiares de desaparecidos políticos. *Historia, Antropología y Fuentes Orales*, 69-75.
- Centro Nacional de Memoria Histórica. (2013). *¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad*. Bogotá: Imprenta Nacional.
- Chetty, S. (1996). The case study method for research in small- and médium - sized. *International small business journal*.
- Clacso, I. (2011). *Realidades del despojo de tierras: retos para la paz en Colombia*. Medellín. Medellín.
- Algranati, Clara (2013). *Extractivismo, despojo y crisis climática*. El Colectivo.
- García, C. I. (2014). Ordenes locales y conflicto armado, una metodología comparada. *Análisis Político*.
- Conciudadanía. (2019). *Sonsón Memoria Viva* . Medellín: Conciudadanía.
- Cortés, P. (2011). El Sentido de las historias de vida en investigaciones socioeducativas. Una revisión crítica en Hernández, Sancho y Rivas. En S. y. Hernández, *Historias de Vida en Educación. Biografías en Contexto* (págs. 68-74). Barcelona: ESBRINA - RECERCA.
- Delgado, R. C. (2009). Origen, liderazgo e ideología de los partidos políticos mexiquenses. *Revista mexicana de ciencias políticas y sociales*.
- Dijk, T. A. (2005). Política, ideología y discurso . *Quorum académico*, 15-47.
- Duncan, G. (2015). *Los señores de la guerra. De paramilitares, mafiosos y autodefensas en Colombia*. Bogotá: Penguin Random House.
- Escobar, A. (2007). *La invención del tercer mundo*. Caracas: Fundación Editorial el perro y la rana.

- Jiménez, F. (2012). La negación del conflicto colombiano: un obstáculo para la paz. *Espacios públicos*, 9-34.
- Galtung, J. (2003). *Paz por medios pacíficos. Paz y conflicto, desarrollo y civilización*. Bilbao: Gernika Gogoratus.
- García, C. I. (2007). Conflicto, discursos y reconfiguración regional.El oriente antioqueño: de la Violencia de los cincuenta al Laboratorio de Paz. *Revista*.
- García, C. I., & Aramburo, C. I. (2011). *Geografías de la guerra, el poder y la resistencia : Oriente y Urabá antioqueños 1990-2008*. Iner- Codefi.
- Ghiso, A. (2002). Técnicas Interactivas para la Investigación Social Cualitativa. *Fundación Universitaria Luis Amigó*.
- Gómez, A. (2008). *Corregimientos del Oriente Antioqueño*. Rionegro: Observatorio de Paz y Reconciliación del Oriente Antioqueño .
- Granada, J. A. (2018). *La Unión: un territorio en disputa, memorias del conflicto armado*. Medellín : Universidad de Antioquia .
- Hincapié, M. T. (2001). Nación, ciudadano y soberano. *Serie Pensamientos*, Corporación Región .
- Hincapié, M. T. (2006). Notas preliminares sobre resistencias de la sociedad civil en un contexto de guerras y transacciones. *Estudios Políticos*.
- Histórica, C. N. (2013). *Medellín: Memorias de una guerra urbana*. Medellín.
- Histórica, C. N. (2013). *Recordar y narrar el conflicto: herramientas para reconstruir memoria histórica*. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia.
- Bolívar,I. (2003). *Violencia Política en Colombia. De la nación fragmentada a la construcción del Estado*. Bogotá: Cinep.
- Isabel, G. (2015). Un derecho elaborado puntada a puntada. La experiencia del Costurero Tejedoras por la Memoria de Sonsón. *Universidad de Antioquia*.
- Jaramillo, C. C. (2016). *Desarrollo local, conflicto armado y modelo de desarrollo : el caso de Sonsón*. Medellín : Universidad de Antioquia.
- Jelin, E. (2001). *Los trabajos de la memoria*. Madrid: Siglo XXI España editores S.A.
- Jiménez, W. O. (2010). Los paraestados en Colombia. A propósito de una investigación culminada. *Revista Facultad de Derecho. Ratio Juris*, 77-97.
- CJD. (2018). *Proyecto: Fortalecimiento de la comunicación e incidencia política de MOVETE para la defensa del territorio en el Oriente Antioqueño*. Medellín .
- Madrigal, F. (2018). *Análisis de Contexto Corregimiento de la Danta, municipio de Sonsón*. Medellín.

- Marín, G. M. (2008). *Mis anécdotas*. Sonsón: Universidad de Antioquia.
- Marx, C. (2004). *El capital. Tomo I, Vol. 3, Capítulos XXIV y XXV*. Buenos Aires.
- Mesa, J. A. (2015). La ley de restitución de tierras en Colombia de espaldas a los opositores de buena fe. *Revista Latinamericana de Derechos Humanos*.
- Mika, H. (2009). Sobre el concepto de justicia transicional desde abajo. Entrevista con el profesor Harry Mika. *Centro Internacional para la Justicia Transicional y Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad*, 227-245.
- Movete. (2018). *Memorias y Resistencias*. Periferia.
- Olaya, C. (2012). *Nunca más contra nadie: Ciclos de violencia en la historia de San Carlos*. Cuervo Editores.
- Olaya, C. (2016). El exterminio del Movimiento Cívico del Oriente de Antioquia. *Ágora U.S.B.*, 128-144.
- Onofre, A. A. (2016). Dinámicas capitalistas para la acumulación por despojo. *Rev. Ciencias Sociales 151*, 31- 41.
- Packer, M. (2013). *La ciencia de la investigación cualitativa*. Bogotá : Uniandes.
- Pecaut, D. (1988). La pérdida de los derechos, del significado de la experiencia y de la inserción social: a propósito de los desplazados en Colombia. *Estudios Políticos 14*, 13-28.
- Peña, L. (2019). *Paz territorial: conectando imaginación moral con e imaginación geográfica*. Bogotá: Insituto Colombo- Alemán para la paz.
- Portelli, A. (1991). *The Death of Luigi Trastulli and Other Stories*. New York: State University of New York Press.
- propuesta, D. I. (1987). *Ramón Emilio Arcila*. Bogotá: Tribuna.
- Reconciliación, C. N. (2009). *Víctimas, violencia y despojo. Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado*.
- Restrepo, F. E. (2015). *El proyecto minero-energético en la región del Oriente Antioqueño y sus impactos sobre el territorio*. Medellín: Corporación Jurídica Libertad .
- Rincón, A. M. (2018). Dimensión constitucional y mecanismos de la acción de restitución de tierras en Colombia. *Rev. Derecho no.49 Barranquilla Jan./June*.
- Rodriguez, A. I. (2017). Queremos construir nuestros territorios. *Ágora U.S.B.*
- Romero, G. R., & Zapata, D. C. (2018). Hacer un desplazado: dimensiones institucionales y subjetivas del programa de atención a víctimas del conflicto armado en Colombia. *Revista de Antropología Social*, 23-48.
- Ruiz, C. (1984). Un pueblo en lucha: El Oriente.

- Saéñz, O. (1986). *Desarrollo regional y movimientos cívicos en el Oriente Antioqueño. 1860 – 1982*. Bogotá: Cinep.
- Sánchez, G. I. (2013). Justicia transicional “desde abajo”: Un marco teórico constructivista crítico para el análisis de la experiencia colombiana. *Co-Herencia*, 137-166.
- Sanz, R. G. (2000). *Micropolíticas del cuerpo*. Buenos Aires: Editorial Biblos.
- Seoane, J. (2013). *Extractivismo, despojo y crisis climática*.
- Shakespeare, W. (1600).
- Suárez, A. (2021). Memorias en contexto. Más allá de la literalidad de las palabras. *Estudios Políticos*, 60, 27-46.
- Torres, E. A. (2009). *Luchas cívicas, trayectorias geopolíticas en Colombia*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales.
- Uprimny, R., & Saffon, M. P. (2009). Reparaciones transformadoras, justicia distributiva y profundización democrática. En J. y. Corte Internacional Para la Justicia Transicional y Centro de Estudios de Derecho, *Reparar en Colombia: los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión*.
- Vera, F. H. (2016). La construcción del concepto de paz: paz negativa, paz positiva y paz imperfecta. *Cuadernos de estrategia*.
- Yin, R. (1989). *Case Study Research: Design and Methods*,. SAGE Publications.